DIARIO
DE LAS
SESIONES DE CÓRTES

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. MARQUÉS DE LA HABANA

SESION DEL SABADO 4 DE FEBRERO DE 1888

SUMARIO. Abrease á las dos y treinta minutos.—Se lea y aprueba el Acta de la anterior.—Anuncia el Sr. Salamanca y Negrete cuatro preguntas al Sr. Ministro de la Guerra, referentes a los honores funebres de D. Alvaro de Bazan; trato que por la Compañía Tranatlántica ha de darse, como pasaje de embarque, á los soldados de Ultramar; negación de reforma de una propuesta del capitán general de Filipinas, y deudas y abonarés de los oficiales del ejército de Cuba.—Da por contestada el Sr. Graells su pregunta respecto á la aparición de la filoxera en Córdoba; por suspendida su interpelación acerca de la pesca fluvial; dirigio dos ruegos referentes á este punto, así como á la creación de piscifactorias, y mantiene, además de su interpelación sobre la Escuela de montes, su petición de los expedientes relativos á la estación biológica marina y la Comisión entomológica.—Preguntas del Sr. Alvarez (D. Manuel María) sobre falsificación de los nuevos duros seiscientos con el busto de Don Alfonso XIII, seguridad personal e indultos.—Aclaración del Sr. Fabiá.—Observaciones del Sr. Ministro de Gracia y Justicia.—Rectificación del Sr. Alvarez.—Orden del día: sorteo de Secciones.—Vaticícan dicho acto.—Continúa el debate sobre el Jurado.—Apoya el Sr. Maluquer su enmienda al art. 4.—Le contesta el Sr. Aldecoa.—Rectifican ambos señores, con una advertencia al primero del Sr. Presidente.—Alusión del Sr. Rojo Arias.—Rectifican los Sres. Maluquer y Rojo Arias.—No se toma en consideración la enmienda.—Se lee otra del señor Hernandez Iglesias.—La apoya su autor.—Le contesta el Sr. Aldecoa.—Rectifica el Sr. Hernandez Iglesias.—Observaciones del Sr. Ministro de Gracia y Justicia.—Rectifican los Sres. Hernandez Iglesias (con una advertencia del Sr. Presidente) y Ministro de Gracia y Justicia.—No se toma en consideración la enmienda.—Léanse el art. 4.—Se le reserva la palabra al Sr. Silvela (D. Luis).—Se suspende el debate.—Léanse dos dictámenes de la Comisión de actas, y se declara urgente su discusión.—Queda sobre la mesa un estado de la recaudación de la renta de aduanas en Cuba.—Léanse, anunciándose su impresión y reparto, tres enmiendas del Sr. Oliva al proyecto de ley sobre concesión á los pueblos de terrenos en concepto de aprovechamiento común y dehesas reales.—Orden del día para el lunes: á primera hora reunión de Secciones para constituirse y nombrar Comisiones; continuación del debate sobre establecimiento del juicio por jurados para determinados dolitos; discusión de los dictámenes acerca de los asuntos siguientes: actas; venta del dominio directo de los terrenos pertenecientes á la Comunidad judía del Caney; rebaja del precio de los telegramas destinados á la publicidad en la prensa política, és inclusion en el plan general de carreteras de tres ramales: uno de Herrera á Fuente-Ganil; otro de Badajozas á Casarriche, y otro de la estación de Piedra á la carretera de Estepa.—Se levanta la sesión á las seis y cuarenta minutos.
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Graells tiene la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Graells tiene la palabra.

El Sr. GRAELLS: Señores Senadores, en la sesión del día 1 de febrero, tuvo por fin a bien visitarnos el Sr. Ministro de Fomento, mi respetable amigo, cuyas ocupaciones en la otra Cámara, según dijeron, no los habían permitido asistir al Senado con la frecuencia que deseaba.

Ausente yo del estrado, por encontrarme en el Ministerio de Marina ocupado en un servicio oficial de aquel departamento, hubo de echarme de menos el Sr. Ministro de Fomento para contestar a las preguntas que le tenía dirigidas por conocimiento de la Mesa, de cuyo modo, según he leído en el Extracto de las sesiones, aplaza para otro día venir a contestarnos. Cúmplense, pues, darle las gracias por su fina atención, que espero sea trasmitida a la Mesa, rogándole diga al mismo tiempo al Sr. Ministro de Fomento, me doy por contestado en lo referente a las preguntas sobre la aparición de la floraxa en la provincia de Córdoba, que según dicen los periódicos, está confirmada en Montilla y Alcunea como afirmó, porque de cierto lo sabía, y lo excuso contestarme, porque haciendo con duda caso de mis referidas preguntas, ha dispuesto con premura se reuniera la Comisión central de defensa contra la plaga floraxa, celebrando, desde que fue creada, ayer su primera sesión para ocuparse seriamente en su cometido, tan lamentablemente descubierto como ha estado, no por culpa de los dignísimos individuos que tal Comisión componen.

También tengo entendido que, no sé si por mis repetidas instancias en esta Cámara, el interpelante anunciado sobre la desastrosa ley de pesca fluvial, que tanta falta hace, en el Ministerio de Fomento agita la idea de un decreto para la creación de piscicultorías, que debe haber pasado a consulta del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio; y si así fuera, suspenderé mi interpellación anunciada sobre este asunto hasta ver lo que resulta, reservándome reproducirla, si, como no deseó, se volviere a dejar dormida la repoblación y defensa de la pesca en nuestras aguas dulces.

Para evitar inconveniencias que pudieran ocurrir en este importante asunto, me permito dirigir dos ruegos al Sr. Ministro de Fomento; siendo el primero, que antes de publicar el decreto sobre creación de piscicultorías, tráigalas Cámara el proyecto de ley de pesca fluvial, para que se discuta y apruebe, y una vez sancionada dicha ley, pueda ajustarse el decreto a sus preceptos; y segundo, que también lea con detención y estime convenientemente las razones del informe que sobre la creación de piscicultorías le dé el Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, que será siempre el parcer o juicio de hombres respetables, y el resultado de un estudio maduro y discusión concomitante, y no la simple opinión o criterio de un individuo, más expuesto a equivocarse que el Consejo pleno referido.

De este modo, y no como otras veces se ha hecho con mencionado de la confluencia y consideración que merecen los dictámenes de los Consejos del Ministerio de Fomento, se evitarán errores parecidos a los que han tenido lugar con el arriado de la piscicultura del Monasterio de Piedra, inconveniente a todas luces, bajo todos los conceptos.

Por fin, deseo manifestar asimismo al Sr. Ministro de Fomento, que mantenga mi interpelación sobre la observancia de las prácticas forestales en lo
Escuela de mutes, esperando me señale día para exponerla.

Y asimismo la petición de los expedientes completos, tal cual los pedí en la sesión del día 25 de Enero último, sobre la estación biológica marina y la Comisión entomológica, pues deseo estudiarlos detenidamente por la importancia que este asunto tiene si se le diera la dirección y desempeño que aconseja la ciencia para que resulte el provecho apetecido de todos.

El Sr. **PRESIDENTE**: La Mesa pondrá en conocimiento del Sr. Ministro de Fomento las peticiones que acaba de hacer el Sr. Senador Graelis.

---

**El Sr. PRESIDENTE**: El Sr. Alvarez (D. Manuel María) tiene la palabra.

**El Sr. ALVAREZ (D. Manuel María)**: Señor Presidente, en el día de ayer venía con ánimo de dirigir una pregunta al Sr. Ministro de Hacienda respecto a la cuestión de los nuevos duros y de extenderme algo sobre este particular; pero al llegar aquí, supe que se había anticipado mi distinguido y siempre respetado amigo el Sr. D. Antonio María Fabiá, y que había hablado del asunto. Parece, pues, que ya estaba conseguido el objeto que aquí me había traído por compromisos con varios banqueros de esta capital que me habían rogado que tratarase del propio asunto en el Senado; pero después de haberle leído en el **Extracto** de la sesión lo que sobre el mismo punto tuvo la bondad de decir el Sr. Fabiá, he tomado el planteamiento del Sr. Presidente y el Senado que haga algunas consideraciones, que procurarán sean cortas, toda vez que por principio general no abuso jamás de la benevolencia de la Cámara.

Cumpliendo este propósito, debo manifestar que, en mi sentir, el Sr. Ministro de Hacienda debe preocuparse grandemente de las indicaciones hechas por el Sr. Fabiá, no solo para averiguar quién sea el autor o autores del delito cometido, sino también para remediar el mal y los grandísimos defectos que realmente tiene la nueva moneda acuñada.

Me conviene declarar, sin instigación de ninguna especie, que el jefe de la Casa de moneda de Madrid es un antiguo, honrado y distinguido funcionario, y que, por consecuencia, tengo la absoluta seguridad de que ha de contribuir, en todo lo que le sea dado, a la investigación de la verdad, pues de lo dicho por el Sr. Fabiá se deduce que es escandaloso que una moneda acabada de poner en circulación, haya sido falsificada instantáneamente.

Esta es una oportuna que no se puede improvisar, pues si el troquel, el rubí, o los dibujos, ni los demás instrumentos que son necesarios para la falsificación, se pueden improvisar, por más que se diga que hoy se han hecho muchos adelantos en el trastorno de los metales al acero.

En efecto, como dije anteriormente, el Sr. Fabiá, el busto de los duros falsos contiene una porción de variantes, por las cuales se viene a reconocer la falsificación, aun cuando el legítimo tampoco contiene muchas perfecciones.

Yo debo, pues, que el dignísimo Sr. Ministro de Gracia y Justicia, mi respetado amigo, tuviera la bondad de manifestar a su compañero el Sr. Ministro de Hacienda que, toda vez que en mi sentir, este momento puede evitarse en gran parte el perjuicio que se pueda ocasionar con los duros falsos, se retiren los legítimos de la circulación, porque sí bien en la capital hay más medios de comprobación y más gasto que investigue la moneda (El Sr. Fabiá me lo ha dicho), en los pueblos no se tienen esos medios, y son hasta cierto punto tan amigos de asegurarse de sus intereses. La cantidad de duros acuñada con el nuevo busto del Rey Don Alfonso XIII, debe ser hasta ahora, de poca consideración, porque creo que existe en poder de un antiguo y acreditado establecimiento, que está ligado con el Gobierno de S. M., una gran cantidad de duros antiguos muy importante todavía; y se ha de haber en la misma Casa de la moneda metálica unida, pero no acuñados; y por consecuencia, pudiera suspenderse la acuñación de esos duros, y hacer un nuevo troquel que remiende las perfecciones de que nos ha hablado el Sr. Fabiá, y que se notan en la moneda de los países que citó en el día de ayer, procurando que por lo menos tuvieran algunas más perfecciones que las que presentan los duros actuales.

Es además necesario que el Sr. Ministro de Hacienda se fije mucho sobre este particular, porque hay en nuestro país, realmente, grabadores de gran mérito, y es una desgracia que cuando llega a salir una moneda, salga en las condiciones en que ha salido esta.

Y esto es tanto más preciso, tanto que, según parece, el Sr. Ministro de Hacienda tiene el pensamiento de retirar de la circulación las monedas de oro de 25 pesetas, para acuñar otras de 29, con el noble intelecto de ponerlas en consonancia con las de la vecina Nación francesa y con las de otros países, porque, a excepción de Inglaterra, que conserva la libra esterlina, ó sea la moneda de 25 pesetas, las demás Naciones han adoptado la moneda de 20 francos ó pesetas.

Creo, repito, que el Sr. Ministro de Hacienda debe fijarse en este punto, atendiendo a que hoy, por las razones indicadas, con pequeño sacrificio se pueden evitar los graves males y hasta el desorden que se produciría para España si continuara circulando la moneda recientemente acuñada.

Respecto a la investigación, yo me atrevería a rogar al Sr. Ministro de Gracia y Justicia que, puesto de acuerdo con sus compañeros los Sres. Ministros de Hacienda y de Gobernación, practiquen esas gestiones que, cuando se llevan a cabo con mucho interés, actividad y celo, suelen dar resultados positivos, y digo que se pongan de acuerdo los tres Sres. Ministros, porque el de Hacienda tiene relación con esta investigación, hasta cierto punto de familia ó doméstica, que indicó el Sr. Fabiá, con respecto a la Casa de la moneda; el Sr. Ministro de Gracia y Justicia relativamente a los señores jueces, y el de Gobernación porque en su departamento existe un Negociado, que es bastante costoso, que se llama de Seguridad pública, donde deben ser conocidos los criminales.

Y digo que en ese Negociado deben ser conocidos los criminales, porque diariamente leo en los periódicos que se ha cogido a todos número tantos, y a los ocho días vuelvo á leer que lo han preso nuevamente; que al Cuerpo les han detenido en tal parte, y al poco tiempo aparece en otra; lo cual indica que se conoce á los criminales, pero que, acaso por deficiencias de la ley en lo cual no me mezclo, porque no lo entiendo, no se puede, cuando se coge á uno de estos cri-
minales, mandarlo de justicia en justicia al pueblo de su naturaleza, evitando así que los mismos individuos que antes habían delinquido, cometas otros crímenes. Porque, repito, si hoy van á la Cárcel Mo- dió á ponerse el capuchón, pasado mañana están en la calle: ellos y ellas, porque también sucede lo propio con muchas señoritas Cuervas y otras pajarracillas. (Risas.)

Por consecuencia, me parece que es natural que se tomen las medidas convenientes para que esos hombres de mal vivir se hallen imposibilitados de una vez para cometer robos de relojes y otras cosas, porque están listos en todas partes para todo. No hace muchos días uno de esos sujetos entró en mi casa, vió un limpiapies muy bonito, que me habían traído de Inglaterra y se lo llevó; porque, repito, que están listos en todas partes.

Pero ese ruego, que una vez descubierto el crí- men, se castigue de veras. Y con tal motivo voy á dirigir un ruego especialísimo á mi distinguido amigo el Sr. Ministro de Gracia y Justicia; ruego que envuelva una idea que, en mi sentir, ha de estar en consonancia con las de S. S.; pero ya se ve: los compromisos políticos y las consideraciones perso- 

ales, hacen que se salga del límite de que, en mi concepto, no se deba salir.

Los indultos por falsificaciones y por otros deli- tos de especie análoga, debían, no solo escatimarse, sino hasta negarse; y yo llevo esta idea al punto de creer que los indultos de pena de muerte solo deben otorgarse en rarísimos y excepcionales casos; porque, de lo contrario, se da lugar a males de gran consi-

deración.

Y oye que el Sr. Presidente pone la mano sobre la campailla, y ciertamente que esa actitud me da temor y me coarta. Su señoría ha visto cómo en una sesión inmediata otro Sr. Senador ha estado hablando hora y cuarto, y en mi sentir, no diría cosas más títi- les, necesarias y justas que las que voy manifestando. Si S. S. me lo permite, concluiré mi pensamiento: si no, respetándole siempre y guardándole las considera-

ciones que por tantos títulos se merece, me sentará.

El Sr. PRESIDENTE: Continúe V. S.

El Sr. ALVAREZ (D. Manuel María): Habiendo, señores, que no hace mucho tiempo se cometió un horroroso crimen en una capital de provincia; al de- lincuente se le contó a la pena de muerte, y a con- secuencia de muchísimos trabajos se le concedió in- 

dulto. Pues ¿señores cuál fué el arrepentimiento de aquel criminal? Consiprar en una plaza cercana á Ceuta con objeto de entregarla á ciertos conspirado- res. También recuerdo que, siendo yo muy joven, á uno que era altamente criminal, después también de muchas influencias, se le otorgó el indulto de la pena de muerte, comitándose por la de diez años y un día de presidio, equivalente entonces á las penas per- pétuas. Cumplida la condena, al año de salir de pre- sidio aquel hombre mató á un padre de familia que tenía cuatro hijos, dejando á éstos pereciendo, en la miseria.

Yo creo que al magistrado, cuando pone la pluma sobre el papel para firmar una sentencia de muerte, le tiembia la mano, y la firma, al fin, porque no puede pasar por otro punto. Hay delitos gravesísimos respecto á los cuales es un mal que se propone la concesión del indulto. Claro es que S. M., que es la bondad mis- ma, tendrá siempre muchísimo gusto en prestarle á cuantas indicaciones se le hagan para otorgar el per- 
dón; pero, repito, que debía evitársele el compromiso de ejercer tan noble prerrogativa, que sólo se com- prende en determinados y señaladísimos casos.

Siento haber molestado algunos momentos á la Cámara y al Sr. Presidente; pero los ruego me disis- 

túen en gracia de que procuro no fatigar la atención del Senado sino rara vez, y cuando lo hago es á fuer- zas de convicción, y en mi concepto, de necesidad y de justicia.

El Sr. FABLE: El Sr. Fabié tiene la pal- 

abra.

El Sr. FABLE: No hubiera pedido la palabra, se- 

ñores Senadores, sino fuera porque creo un deber de mi sinceridad y de mi manera de pensar, el hacer presente que, cuando yo me ocupé ayer de la cuestión de la falsificación de las monedas de cinco pes- 

tas, recientemente puestas en circulación, no fué mi ánimo, ni de cerca, ni de lejos, dirigir ninguna incul- pación á persona alguna determinada, mucho más el señor director de la Casa de la moneda, que estoy cierto (aunque no lo conozco, pero me esta lo dicho por mi particular amigo el Sr. D. Manual María Al- 

mez de que es un honrado y antiguo funcionario, y por tanto, digno de que yo le tenga en el concepto que se merece, porque no soy, por fortuna, con data- 

tos para ello, de aquellos que tienen una opinión des- 

favorable de los empleados públicos. Sé que esto es una gran injusticia, y que en general los funciona- 

rios públicos merecen toda la consideración y todo el respeto que se pueda tributar á las clases más res- 

petables de la sociedad, sin que sea para nada digno de tomarse en cuenta que en ella, que por cierto es muy numerosa, haya como en todas las clases socia- 

les, individuos que salen á su deber. Yo me limito á llama- 

rar la atención del Sr. Ministro sobre esa circun- 

stancia especialísima y que daba á esta falsificación un carácter, por decirlo así, excepcional, conviencie á saber: que la moneda falsa se habla puesto en circu-

lación casi al mismo tiempo que la moneda verdad- 

iera.

Por cierto que me he de lamentar con esta ocasion de que no se haya servido el Sr. Ministro de Hacienda venir á decírnos algo sobre este particular, que yo entiendo muy grave, porque además de esa circuns- 


tancia, que ya de suyo lo es mucho, hay otra de que yo me ocupé y que consiste en que, según la opinión de lo generalmente manifestada (yo no he hecho el análisis ni tendría ahora medios para ello), la moneda falsa es de plata, aunque con una aleación inferior á la de 900 milésimas de fino que la moneda legítima debe tener.

Dicho ésto, y lamentando de nuevo que el señor Ministro de Hacienda no haya venido (sin duda por- 

teará otras ocupaciones más importantes, aun- 

que creo yo que pocas cosas pueden serlo tanto como ésta), yo me adhiero á lo que ha manifestado el señor Alvarez, respecto á la conveniencia, por no decir la necesidad, de que se suspendan las aculturaciones hechas con elementos tan malos, á fin de que se hagan otras con la perfección posible, que es mucha. Para lograrlo no habría, en mi concepto, más que establecer ciertas reglas en la forma de elegir los cuños; no ateniéndose á los grabadores de la Casa de la moneda, porque ya sabemos que eso dá resultados fatales y viene dándolos desde hace mucho tiempo, sino abriendo concursos públicos, ó de cualquiera otra
más que á la ligera. El de los indultos. Yo me alegra de que el Sr. Alvarez, así como los demás señores Senadores, hicieran uno y otro día esa predicación contra el indulto, para modificar un poco las corrientes de la opinión que acerca de ellos existe hoy, y que son, á las veces, verdaderamente irresistibles; pero fuera de esto, debo decir á mi amigo el Sr. Alvarez, que lo mismo en el Ministerio de Gracia y Justicia que en el Consejo de Estado y por lo general en los tribunales, hay establecida una especie de jurisprudencia desfavorable para los autores de falsificaciones, sobre todo, cuando se trata de falsificaciones de moneda, de billetes del Banco ó de títulos de la denda del Estado, ó de uno de esos delitos que son graves y trascendentales. El tribunal sentenciador, rara vez en estos casos, da informe favorable; el Consejo de Estado casi nunca, y es menester que haya circunstancias excepcionales para que informen á favor del indulto si se refiere á esta índole de delitos; y en el Ministerio de Gracia y Justicia hay también cierta tradición en mirarlos desfavorablemente cuando se trata de aconsejar el ejercicio de la prerrogativa.

Creo haber dado la satisfacción debida, así al señor Fabiá como al Sr. Alvarez; y termino rogándoles que esperen á que el Sr. Ministro de Hacienda venga aquí á dar todas las explicaciones oportunas, tan pronto como las gestiones que hace el Gobierno desde que supo la comisión del delito, dén algún resultado.

El Sr. ALVAREZ (D. Manuel María); Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA (Alonso Martínez); Mi amigo el Sr. Alvarez ha tocado en su breve peroración tantas cuestiones, que si yo hubiera de tratarlas todas, tendría que hacer un discurso exento, que daría lugar á rectificaciones y réplicas, ó mejor dicho, á nuevos discursos que llenarían mucho espacio de tiempo.

Voy, pues, á limitarme á las contestaciones más concretas.

Empiezo por decir que todo el mundo sabe las múltiples y penosaísimas tareas que pesan sobre el Sr. Ministro de Hacienda, así como á público y notario que mi digno compañero brilla cabalmente por su celo y por su laboriosidad. ¿Quién sabe si á estas horas su ausencia de este recinto se explicará porque se esté ocupando en la misma cuestión acerca de la cual ha creído oportuno llamar la atención del Gobierno el Sr. Alvarez y el Sr. Fabiá?

Los Ministros de Hacienda, de la Gobernación y de Gracia y Justicia han conferenciado ya, anticipándose á los deseos del Sr. Alvarez, sobre esta delradísmisa cuestión. Nadie tiene más interés que el Gobierno en perseguir una falsificación tan grave y trascendental, y por consiguiente, los Sres. Senadores pueden tener la seguridad de que hemos de hacer cuanto esté en nuestra mano por descubrir el delito y aplicar el condigno castigo á sus autores; pero sobre esto no puede decirse por hoy nada; hay gestiones que hace la policía; gestiones que principalmente inciumen á la Dirección de seguridad pública y al Gobierno civil de Madrid, pues el Ministro de Gracia y Justicia tiene escassísimas policías á sus órdenes, y gestiones que exigen el secreto, por lo menos hasta descubrir el hilo de la falsificación de que se trata. Por lo demás, yo celebro que así el Sr. Alvarez como el Sr. Fabiá, hayan reconocido (en lo cual han ejecutado un acto de justicia) la probidad, la inteligencia y la solicitud del digno y antigúisimo funcionario que está al frente de la Casa de la moneda, que efectivamente reconozco á sido respetado por todos los Gobiernos, y hace mucho tiempo que sirve con brillantísimas notas á la Administración pública; teniendo, por mi parte, la seguridad de que ese funcionario ha de cuidar vurar con todo el celo y la energía necesarios, á la acción del Gobierno para perseguir esta falsificación.

Un último punto tengo que tocar, aunque no sea
Concluyo, pues, reiterando mi agradecimiento al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, y esperando que tanto él como sus dignos compañeros, llenos del mejor deseo en defensa de los intereses públicos y de la moralidad, tomarán en consideración las razones expuestas por el Sr. Fabié y por mí, que en este momento, y por no ser cuestión política, han venido á coincidir.

ORDEN DEL DÍA.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Pavia y Pavía): Sorteo de Secciones.

Verificado dicho acto, dió el resultado siguiente:

SECCIÓN PRIMERA.

Sres. Castroñuño (Marqués de),
Cuesta (D. Justo Pelayo),
Fuente Alcázar (D. Sebastián de la),
Franco del Corral (D. Lesmes),
Almaraz (Conde de),
Mouistrol (Marqués de),
Alarcon (D. Pedro Antonio de),
Monteleonte (D. Juan),
Laguna (Marqués de la),
Herreros de Tejada (D. Feliciano),
Paje (D. Eusebio),
Comes de Aréstegui (D. Isidoro),
Angoloti (D. Joaquín),
Cervera (Conde de),
España y Puería (D. José),
Coelho de Portugal (Conde de),
Fontagud Gargollo (D. José de),
Cáceres (Marqués de),
Ulloa y Rey (D. Benito),
Cercuera (D. Eugenio de),
Terror (D. Antonio),
Sanafé (Conde de),
Villa-Antonia (Marqués de),
García Barranzanilla (D. José),
Letamendi (D. José de),
Rodriguez Rubi (D. Tomás),
Cabello Septien (D. Pedro),
Mondéjar (Marqués de),
Oliva y Martin (D. Vicente),
Comas (D. Augusto),
Afonso Colmenares (D. Eduardo),
Paniegas (Marqués de la),
Almagro (D. Mélchor),
Ariaza (Marqués de),
Ferrer y Vidal (D. José),
Bosh y Carbonell (D. José),
Guadalcázar (Marqués de),
Perez Batallon (D. Casiano),
Abascal (D. José),
Miranda (D. Acisclo),
Bañuelos (Conde de),
Santa Cruz (D. Juan Domingo),
Baena (Duque de),
Fernandez de Castro (D. Manuel),
Reinoso (Marqués de),
Fernandez de la Cueva (D. Ruferto),
Uceda (Duque de),
Moreno Abadía (D. Manuel),
Ruiz (D. Jacinto Marfai),

SECCIÓN SEGUNDA.

Sres. Donaire y Simancas (D. Clemente),
Ayarbe (Marqués de),
Lopez y Lopez (D. Matías),
Hornachuelos (Duque de),
Fabié y Escudero (D. Antonio Marfai),
Fontes (D. Juan Bautista),
Rada y Delgado (D. Juan de Dios de la),
Medina Vítores (D. Ricardo),
Rodriguez Arias (D. Rafael),
Puñero y Salguiero (D. Cipriano),
Mansilla (Conde de),
Romero Toro (Marqués de),
Zaldívar (Conde de),
San Juan de Puerto-Rico (Marqués de),
Casagallindo (Conde de),
Cayo del Rey (Marqués de),
Mena y Zorrilla (D. Antonio de),
Girona (D. Manuel),
Céñía (Marqués de la),
Chesté (Conde de),
Calleja y Sanchez (D. Julian),
Perija (Marqués de),
Colmeño (D. Manuel),
Veragua (Duque de),
Martinez Acosta (D. Antonio),
Jovellor (D. Joaquín),
Magat (D. Juan),
Hernandez Pinzón (D. Luis),
Baranzanilla (Marqués de),
Vazquez Lopez (D. Manuel),
Torán y Herreras (D. Juan),
Concha Cañada (D. Juan de la),
Toneros (Marqués de),
Fernandez Nuñez (Duque de),
Felti y Ferrá (D. Jacinto),
Obispo de Segorbe,
Massanet y Ochoa (D. Juan),
Arias y Giner (D. Severiano),
Escosura (D. Luis de la),
Arzobispo de Santiago de Compostela,
Urquijo (Marqués de),
García de Torres (D. Juan),
Alba (Duque de),
Montarco (Conde de),
Alcocer y Arza (D. Mateo),
Guauqui (Conde de),
Ayneto (D. Gregorio),
Miravete (D. Joaquín),
Campo (Marqués de).

SECCIÓN TERCERA.

Sres. Moutevirgen (Marqués de),
Dilár (Marqués de),
San Saturnino (Marqués de),
Gallostra (D. José),
Santana (D. Manuel María de),
Groizard Gomez de la Serna (D. Alejandro),
Leon y Llerena (D. Eduardo),
Madrazo (D. Federico de),
Sanchez Bustillo (D. Cayetano),
Chacon y Maldonado (D. Guillermo),
Botella (D. Francisco),
Pavia y Rodriguez de Alburquerque (D. Manuel),
Hoyos (Marqués de).
Sres. Soto-Ameno (Conde de).
Abarzuza (D. Buenaventura).
Laussat (D. Leopoldo).
Obispo de Gerona.
Martinez de Campos (D. Arsenio).
Grané (D. Manuel María).
García Taasara (D. Carlos).
Tejero Fernández (D. Maximinio).
Monterro Rios (D. José).
Tugut y Gil (D. Antonio).
Beauchout (D. José Ramón de).
Bayona (Conde de).
Morales Díaz (D. Vicente).
Padilla (Conde de la).
Sempurn (D. José María).
Carrión y Castro (D. Adriano).
Casa-Jiménez (Marqués de).
Diezma (D. Leopoldo).
Peñafort (Marqués de).
Peñafiel (Marqués de).
Haza (Marqués de).
Figuera y Silvela (D. Luis).
Paso y Belzú (D. Nicolás).
Durán y Bás (D. Manuel).
Antequera (D. Juan Bauitstal).
Villahermosa (Duque de).
Martín Murgas (D. Antonio).
Arzobispo de Santo Domingo.
Sepúlveda (Conde de).
Rodríguez Díez (D. Bernaldo).
Galdó (D. Manuel María José de).
Rascon (Conde de).
Casa-Valencia (Conde de).
Barroeta y Marqués (D. Angel).
Fernandez Castañeda (D. Telesforo).
Aldaco y Villanes (D. José).

SECCION CUARTA.

Sres. Shee y Saavedra (D. Alejandro).
Arzobispo de Granada.
Torres de la Presa (Marqués de las).
Urquijo (D. Juan Manuel de).
Alonso Rubio (D. Francisco).
Villa-Gracia (Marqués de).
Ríos y Royo (D. Francisco).
Alfonso (D. Félix S).
Alvarez (D. Manuel María).
Heredia (D. Tomás).
Riquelme (D. José Luis).
Calderon y Herge (D. Pedro).
Escudero y Marichalar (D. Cayo).
Alcaines (Marqués de).
San Carlos (Marqués de).
Pezuela (D. Manuel de la).
Ruiz Gomez (D. Servando).
Pazo de la Mercè (Marqués de).
Alcalá Zamora (D. Gregorio).
Casuso y Lezama (D. Juan).
Galarza (Conde de).
Garcia Martínez (D. Diego).
Arús (D. Evaristo).
Mazo (D. Cipriano del).
Puigmaló (D. Pascual).
Martínez Zorrilla (D. José).
Beníyó (Barón de).
Jimenez Gueca (D. Juan).
San Lorenzo (Duque de).

Sres. García (D. Cásper).
Habana (Marqués de la).
Moreno Leante (D. José).
Fuenfants del Valle (Marqués de la).
Moyano (D. Claudio).
Obispo de Zamora.
Vida (D. Fernando).
Gonzalez Español (D. Roberto).
Cangás-Argüelles (Conde de).
Puerto-Seguro (Marqués de).
Caramés (D. Domingo).
Láudio y Font (D. Teodoro).
Búrgos (D. Agustín).
Peña Villarejo (D. Domingo).
Weyler y Nicolau (D. Valeriano).
Narros (Marqués de).
Obispo de Salamanca.
Parra (D. Escolástico de la).
Rojo Arias (D. Ignacio).
Lasala (D. Fermín).

SECCION QUINTA.

Sres. Tetuan (Duque de).
Díez Taravilla (D. Cándido).
Cerralbo (Marqués de).
Montejo y Robledo (D. Telesforo).
Cañada (Conde de la).
Heredia (Marqués de).
Rumero Giron (D. Vicente).
Rodriguez Scoane (D. Luis).
Silvela (D. Luis).
Villanueva (Marqués de).
Echevarría y Fuertes (D. Genaro).
Sagrían (D. Francisco).
Bos (D. Manuel).
Villacargierna (Conde de).
Salamanca y Negrete (D. Manuel).
Melgaro y Flores (D. Francisco).
Mendieta (D. Pedro).
Valdecañas (Marqués de).
Estella (Marqués de).
Villagonzalo (Conde de).
Gonzalez y Fernandez (D. Venancio).
Roger Duval (D. Gill).
Madrid y Ruiz (D. Eugenio).
Peña-Plata (Marqués de).
Garcia Tuñon (D. Jovino).
San Fernando de Quiroga (Duque de).
Beranger (D. José María).
Trell (D. Miguel del).
Sanchez Bregua (D. José).
Sacro-Lirio (Barón del).
Obispo de Canarias.
Oviedo (Marqués de).
San Miguel de Aguayo (Marqués de).
Arzobispo de Valencia.
Bosch (D. Alberto).
Robledo de Cardena (Conde del).
Martinez Durango (D. Manuel).
Santa Cruz de Aguirre (Marqués de).
Obispo de Cartagena.
Santa Cruz (Marqués de).
Maceda (Conde de).
Colmenares y Vizarte (D. José Javier de).
Reig (D. Rafael).
Granada de Ega (Duque de).
Torell y Cabo (D. Andrés).
Sres. Fuente-Santa (Marqués de),
Benamejí (Marqués de),
Francos (Marqués de),
Mosequera (D. Tomás María).

SECCIÓN SENTA.

Sres. Pavía y Pavía (D. Francisco de Paula),
Rivera Vázquez (D. José),
Solar de Espinosa (Barón del),
Miravalle (Marqués de),
Puñonrostro (Conde de),
Torres-Cabrera (Conde de),
Muros (Marqués de),
Iznate (Marqués de),
Riaño (D. Juan Facundo),
Nieto y Serrano (D. Matías),
Chico de Guzman (D. Alfonso),
Medina-Sidonia (Duque de),
Garmendía (D. Martín),
Albarede (D. José Luis),
Cuesta y Cuesta (D. Manuel),
Valmar (Marqués de),
Laso y Salido (D. Francisco),
Viesca de la Sierra (Marqués de),
Camacho (D. Juan Francisco),
Obispo de Madrid-Alcalá,
Gullón (D. Pío),
Rubiales (Señor de), Marqués de Aranda,
Gavia (Conde de),
Irujo (D. Emilio),
Gayangos (D. Pascual),
Silvela (D. Manuel),
Aguilar de Campód (Marqués de),
Obispo de la Habana,
Torre y Villanueva (D. José de la),
Fielina (D. Cándido),
Sanz y Posse (D. Salustiano),
Victoria de las Tunas (Marqués de),
Montero de Espinosa (D. Fernando),
Peralada (Conde de),
Suárez Inclán (D. Estanislao),
Pisa Pajares (D. Francisco de la),
Velasco y Gutierrez (D. Fernando),
García Rizo (D. Antonio),
Malpica (Marqués de),
Puebla del Maestre (Conde de la),
Almanzora (Marqués de),
Cuesta y Santiago (D. José de la),
Villares (Conde de los),
Cárdenas (D. Francisco de),
Victoria (Duque de la),
Conquista y de Albaida (Marqués de la),
Jlorenzo (D. Alejandro),
Obispo de Teruel,
Posada Herrera (D. Benito).

SECCIÓN SETIMA.

Sres. Romera (Conde de la),
Asprillas (Marqués de),
Carbonell y Ruiz (D. José María),
Fernandina (Conde de),
Mercé y Calvo (D. Manuel),
García Ramírez (D. Sebastián),
Pallares (Conde de),
Puig (D. Fernando),
Malquie de Tirrell (D. José),
Valcárcel (D. Cários).

Sres. Vallejo (Marqués de),
Tejada de Valdoseira (Conde de),
Trives (Marqués de),
Armiñana (D. Manuel),
Hivas (Duque de),
Fuenmayor y Sánchez (D. Pablo de),
Hernández de la Rúa (D. Vicente),
Saavedra Bidalgosa (D. Joaquín),
García Cervino (D. Tomás),
Sardoal (Marqués de),
Hernandez Iglesias (D. Fermin),
Covadonga (Barón de),
Polo de Bernabé (D. José),
Novales (Marqués de),
Nuñez de Arce (D. Gaspar),
Real (Conde de),
Graells (D. Mariano de la Paz),
Obispo de Santander,
Rodríguez de Cepeda (D. Antonio),
Cayo y Cárdenas (D. Francisco Javier),
Valmadrén (Marqués de),
Poso (D. Inocente del),
Cervera (Marqués de),
Hoppe (D. Federico),
Hijar (Duque de),
Zavala (D. Martín de),
Abrantes (Duque de),
Almadóvar del Valde (Duque de),
Dabán y Ramírez de Arellano (D. Luis),
Ramírez Carmona (D. Francisco),
Marcoartu (D. Arturo),
Sanchez Arjona (D. Clemente),
Almázar de Guad-el-Eljú (Conde de la),
Benavídez (D. Francisco de Paula),
Mollins (Marqués de),
Montefrierte (Conde de),
Monte-Negron (Conde de),
Valera (D. Juan),
Torrecián (Conde de).

(Véase por orden alfabético en el Apéndice 1.º al Diario núm. 40, que es de esta sesión.)

El Sr. VICEPRESIDENTE (Pavía y Pavía): Continúa el debate relativo al proyecto de ley sobre establecimiento del juicio por jurados para determinados delitos. (Véase el Apéndice 3.º al Diario núm. 18, sesión de 22 de Diciembre de 1887, y los Diarios núms. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, sesiones de 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Enero, 1.º y 3 de Febrero de 1888.)

El Sr. SECRETARIO (Torre y Villanueva): Al art. 4.º de este proyecto de ley hay otra enmienda, del Sr. Malquie, qué dice así:
«El Senador que suscribe tiene la honra de pedir al Senado que el art. 4.º del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley del Jurado se sustituya por el siguiente:
Art. 4.º El Tribunal del Jurado conocerá:
Primero. De todas las causas por los delitos que se definen y castigan en el Código penal, excepto los que tengan señaladas las penas de arresto y multa.
Segundo. De las causas por los delitos definidos y penados en la ley electoral.»
Es segunda lectura y la Comisión se servirá manifestar si admite o no la enmienda.
El Sr. ALDECOA: La Comisión no puede aceptar la enmienda del Sr. Maluquer.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Pavia y Pavia): Tiene la palabra el Sr. Maluquer para apoyar su enmienda.

El Sr. MALUQUIER: Señores Senadores; si hubiera tenido que responder, formando parte de la Comisión, al brillante discurso que en la sesión de ayer se sirvió pronunciar el Sr. Conde de Canga-Aréguelles, le hubiera contestado con los principios esenciales que informan el Jurado, diciéndole que era preciso que ese tribunal entendiese de toda clase de delitos. El Sr. Conde de Canga-Aréguelles, bajo su punto de vista, estuvo en un terreno lógico, porque dijo S. S.: «si el Jurado conoce de determinados delitos y se exceptúan gran número de ellos, ¿por qué no se exceptúan los hechos punibles contra la religión del Estado?» Es imposible que por la Comisión se responda satisfactoriamente a este argumento; quedará siempre incontestado, puesto que falta el fundamento principal, que es la lógica, en el proyecto que se discute. ¿Es bueno el Jurado para determinada clase de delitos? ¿Es que el Jurado significa la soberanía o la representación de la soberanía en la administración de la justicia? Pues sí el Jurado es necesario respecto de unos delitos, debe serlo para todos; si es una circunstancia esencial para el descubrimiento de la verdad en la administración de justicia, ¿por qué no se hace extensivo el Jurado por jurados a toda clase de delitos?

Este es el argumento que presentó también el dignísimo rector de la Universidad central y Senator Sr. Pisa Pajares, y tampoco ha sido contestado por la Comisión.

Ya sé yo que el Sr. Conde de Canga-Aréguelles, en sus argumentos, lo que quería era combatir el Jurado, porque S. S. pertenece al partido conservador, que es adversario decidido del Jurado. (El Sr. Hermenegildo Iglesias: No tanto.) Me alegro mucho de que diga el Sr. Hermenegildo Iglesias que no tanto. Por lo visto, hay algunos conservadores que ya transiguen con el Jurado. (Varias señoras de la minoría conservadora: No ha dicho eso.) ¿En qué quedamos? ¿Es o no el partido conservador enemigo del Jurado? Porque si hay algún discrepante, me aseguraré mucho de que lo diga.

El Sr. Conde de Canga-Aréguelles, repitió, hablaba en todo contra el Jurado, y de fijo que hubiera presentado con mucho gusto una enmienda que dijera el Jurado no conocerá de ninguna clase de delitos y de esta manera hubiese complicado perfectamente S. S. al partido conservador de que forma dignamente parte.

Algo de importante debe tener el Jurado, cuando personajes políticos tan eminentes como el Sr. D. Manuel Silvela transigian, como dicho señor transigió con él, a cambio de que le fuese admitido en tiempo de la revolución el principio monárquico. El Sr. Ministro de Gracia y Justicia, también transigió con el Jurado, a cambio de que los antiguos constitucionales reconocieras la Constitución del 78, y la considerásemos como definitiva; y últimamente, el distinguido hombre público, Sr. Romero Robledo, ha aceptado el Jurado a cambio de que se le conceda la protección en materias económicas. De consiguiente, parece que esta institución es tan importante, que casi decide de la legalidad en la Nación española. Esa prueba que el Sr. Silvela, el Sr. Ministro de Gracia y Justicia (y no quisiera molestar a S. S. por lo que, si acaso se ofenda, retiraré la frase en el Acto), y el Sr. Romero Robledo, que han hecho ese sacrificio aceptando el Jurado, no serían muy amigos de la institución, cuando consideraron como un verdadero sacrificio admitirlo a cambio del principio monárquico y de la Constitución del Estado. Este proyecto, este sistema del juicio por jurados, especialmente el proyecto del Gobierno, creo que hubiera podido adimitirse cuando se celebró la entrevista entre los señores Alvaro Martínez y Montero Ríos, cuando se pactó la fórmula de garantías. Después, ha habido otros acontecimientos; se han pronunciado en el Real Alcázar, por un eminente hombre público, ciertas palabras en sentido esencialmente democrático y perfectamente constitucionales, aprobadas con entusiasmo y en votación unánime por la mayoría en el Congreso, y el Gobierno las ha apoyado incondicionalmente. Es decir, que el antiguo partido constitucional, luego tu- nisista, es ya un partido democrático.

Ya sé que a algún Senador, que no sé si me está oyendo, le repugna que se bautice con este nombre; pero no hay más remedio. Parece que la democracia se ha impuesto, y que el partido liberal será solamente una especie de ponderación de fuerzas para que regule el movimiento de la democracia. Por tanto, doy plé a el Gobierno y a la Comisión para que me admitan mi enmienda, puesto que hemos entrado en ese nuevo orden de ideas del derecho democrático. Ya sé yo, o al menos creo, que mi enmienda no será admitida, ni siquiera tomada en consideración; pero de eso que conste que un Senador monárquico liberal ha presentado esa enmienda, para demostrar que en esta clase de asuntos político-jurídicos la democracia es compatible con la Monarquía.

Bajo dos aspectos ha dicho el ilustre Sr. Ministro de Gracia y Justicia que podía considerarse el Jurado bajo el aspecto político y el jurídico. Respecto al primero he expuesto ya mi opinión. Estamos en piena democracia monárquica, y por tanto, todos los proyectos que se presenten por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, deben obedecer al nuevo orden de ideas. En cuanto al aspecto jurídico, creo que el Jurado no tiene el Jurado, si no conoce de toda clase de delitos, es decir, que no puede haber justicia si no hay igualdad ante la ley.

Ha dicho la dignísima Comisión que se ha transigido con el partido conservador, en el cual tengo algunos amigos muy queridos que me perdonarán si colectivamente les hago algún cargo. ¡Transacción con el partido conservador! ¿No transigió el Sr. Silvela con el Jurado a cambio de la idea monárquica? Pues creo que forma parte del partido conservador.

Ya sabemos lo que hace en el poder dicho partido; sabemos lo que hizo con el Jurado y con el matrimonio civil. Dicen los conservadores: respetaremos el Jurado una vez votado por las Cortes y sancionado por la Corona. ¡Y lo creo que lo respetará! ¡No fal- taba más! Como que será ley; pero el día que puedan modificar, lo modificarán, y si se sigue el criterio indicado por el Sr. Conde de Canga-Aréguelles, se seguro que aprovechando la Facultad que da este mismo proyecto de suspender el Jurado en algunas provincias, el partido conservador declarará tal vez el estado de sitio en materia de Jurado, y diré: ese suprime el Jurado en toda la Nación española, a pesar de que ahora los ilustres Senadores y Diputados de este
partido dicen que lo respetarán y que no suspenderán el juicio por jurados. Pero quién sabe lo que va a pasar cuando sea gobierno dicho partido, aunque yo creo que tardarán en serlo. Según las circunstancias porque atraviesa la Nación española, el partido conservador podrá decir si considera o no conveniente que siga el juicio por jurados. Y como sus opiniones son contrarias a esta institución, preveo que ha de suspenderlo.

Por consiguiente, antes pudo transigir el Sr. Ministro de Gracia y Justicia con el Sr. Montero Ríos; pero hoy ya no puede transigirse con el partido conservador; en primer lugar, porque ha roto su bondadosa y benéfica con el Gobierno, y en segundo, porque las ideas democráticas se han impuesto de tal manera que exigen un nuevo orden político y jurídico.

En vano se esfuerza el Sr. Aldecoa en explicar aquí las excelencias verdaderas del Jurado; en vano con su elocuente palabra y sus vastísimos conocimientos en materia de Jurado, defendiendo la idea de que el Jurado es una derivación de la soberanía nacional, puesto que significa la intervención del ciudadano en la administración de justicia, porque, enseguida, que hace estas divagaciones S. S., le sale al paso el señor Ministro de Gracia y Justicia imponiéndole su correspondiente correctivo para que no se alarme el partido conservador, que creo yo que ha de suspender el Jurado, y que por lo pronto no es partidario de él, según ha declarado.

Cuando el Sr. Aldecoa habla con algún calor, por ejemplo, de la conveniencia de que el Jurado entienda de toda clase de delitos (porque S. S. en el fondo de su conciencia opina como yo, estoy seguro de ello, en este punto), enseguida le recuerda el Sr. Ministro de Gracia y Justicia que enfrente, repito, está el partido conservador; pues yo por mi parte opino que el plantear una institución como ésta, con timidez, nunca, jamás dará buenos resultados.

El Sr. Aldecoa se ha apresurado a decir que la Comisión no admi- te mi enmienda, y yo creo que en la misma hay un individuo que es un valioso defensor de mis ideas. No sé si se habrán puesto de acuerdo todos los señores de la Comisión, pero repito que hay uno, letrado distinguido, que me parece que no va a contradecir, que está de acuerdo con las ideas que sustento.

Además, como estoy conforme con el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en cuanto a ver consignado en el proyecto que presenté, y que fué muy elogiado, que los delitos electorales fueran de la competencia del Jurado, tengo también un valioso, valiosísimo elemento de apoyo en S. S., y lo facilitó el medio con mi enmienda para que se restablezca su ideal en esta parte.

Además, hay otro Sr. Ministro que, en nombre del partido constitucional, declaró que cuando fuese éste Poder plantearía el Jurado que entendiese en toda clase de delitos. Dijo S. S.: «admitimos y queremos plantear el Jurado para toda clase de delitos.» Con estos antecedentes y con estos poderosos defensores, me parece que la enmienda debiera prosperar, y algunos habrá modificado en esta parte sus ideas, seguramente en aras del patriotismo.

No tengo que decir si soy o no partidario del Jurado. Defendí esta institución en el año 1883 en una modesta Revista jurídica; lo he defendido el 78 ante el partido conservador; lo he defendido el 81; última-mente el 83, y ahora en este mismo momento; por tanto, soy jurista consecuente. (El Sr. Rojo Arias: Impudente.) Impudente, como dice el Sr. Rojo Arias, de modo que no he vacilado nunca ni bajo el punto de vista jurídico, ni bajo el político, en sostener esta institución. Y es que yo censuro al digno Sr. Ministro de Gracia y Justicia por haber admitido el Jurado, movido por su acendrado patriotismo, según nos ha explicado aquél? No; no puedo censurarlo bajo ningún concepto por su conducción en este asunto; tenganlo entendido S. S. y el Senado; pero hoy el Jura- do se impone. ¿No se piden jueces legales para los tribunales de comercio? ¿No serían jurados el mismo Sr. Conde de Canga-Argibelles y los Sres. Senadores del partido conservador, si el Senado se constituyese en tribunal de justicia, según la ley vigente sobre el particular?

Señores, en algunas ocasiones casi tengo remordimientos por haber defendido que se aplicase por los tribunales el Código penal en materia de imprenta. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que, sin que esté completo nuestro sistema de enjuiciar respecto de dichos delitos, en vez de producir los resultados que se esperaban, hoy, aunque los tribunales, como siempre, cumplen con la ley vigente, no resultan las ventajas que se reconocen en el Jurado para la administra-ción de justicia. Luego resulta que aplicando solo el Código penal sin reformar y sin la intervención del Jurado, nuestro sistema no es completo ni tiene el engranaje que debía tener.

Yo he sostenido constantemente que los autores de los delitos, cometidos por medio de la prensa, no debían estar sujetos a una ley especial, sino que debían ser castigados por los tribunales ordinarios con arreglo a la legislación común, y siempre con intervención del Jurado. Significando este procedimiento, tenemos el orden antiguo, por un lado, y no tenemos las ventajas del Jurado, que es el sistema moderno. Así es que, en los delitos de imprenta a que me refiero, aunque los tribunales de derecho cumplan con la ley, como soy el primero en reconocer, existe una deficiencia, que es la falta de concurso del Jurado.

Aprovecho, pues, esta oportunidad, para rogar al Sr. Ministro de Gracia y Justicia que, teniendo en cuenta esa deficiencia de gran importancia, se sirva proponer a S. M. la Reina Regente un indulto a la prensa. Hace pocos días entré en la Redacción de un periódico, y al preguntar por uno de sus redactores, me contestaron que estaba en la Cárcel Modelo. He entrado á otro periodista, y al adquirir noticias de sus compañeros, me responde: «Pulano está en la cárcel y Zutano ha sido condenado recientemente.» El periódico La Voz de Galicia, por ejemplo, tiene, si no estoy equivocado, cuatro causas pendientes.

Por lo tanto, y en vista de lo que dejo expuesto, ruego al Sr. Ministro de Gracia y Justicia que se fije en este asunto, de verdadera importancia para la prensa periódica.

Tres agravios resultan, Sres. Senadores, del proyecto de Jurado: el primero contra el министро Jurado, puesto que se le considera poco imparcial para conocer de cierta clase de delitos; el segundo contra la magistratura, puesto que pudiera creerse, siquiera con error, que tendría cierta docilidad para atender las indicaciones del Gobierno, quizás, al conocer de los delitos que se exceptúan de la competencia del Jurado. Idea que rechazo desde luego. Y el tercero contra las
mismas instituciones, puesto que se considera que de los delitos de lesa majestad y otros análogos, no puede conocer el Jurado, pero sí los tribunales de derecho, con lo cual parece indicarse que las instituciones no tienen más salvaguardia que una clase determinada del Estado, y de real nombramiento. Estos tres agravios de que he hecho mención resultan en el proyecto, por no seguirse la idea de que el Jurado sea competente para toda clase de delitos.

Yo no sé si se ha leído por alguno de los Sres. Senadores que han tenido en este debate, el número de delitos que se exceptúan de la competencia del Jurado. Esto, no obstante, me permitiré indicarlos.

Se exceptúan de la competencia del Jurado los "Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.
Delitos contra el derecho de gentes.
Delitos de piratería.
Delitos de lesa majestad.
De los atentados contra la autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia.
Desacatos, insultos, injurias y amenazas a la autoridad, y de los insultos, injurias y amenazas a sus agentes y a los demás funcionarios públicos.
Desvío de bienes públicos.
Ocupación fraudulenta de bienes ó de industria, false testimonio, y de la acusación y denuncia falsas.
Usurpación de funciones, calidad, etc.
Juegos y riñas.
Todos los demás delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, además de los tres que contiene el proyecto, y entre ellos el de prevaricación y fraudes y exacciones ilegales.
Algunos de lesiones.
Adulterio.
Delitos de escándalo público.
Estupro.
Culma.
Injuria.
Delitos contra el estado civil de las personas.
Algunos delitos contra la libertad y seguridad.
Hurtos.
Defraudaciones.
Daños.
Delitos definidos y penados por la ley electoral.

Es decir, casi la mitad de los que contiene el Código penal.

¿Dónde está, pues, esa soberanía, sin responsabilidad, de los jurados, de que nos hablaba el Sr. Aldecoa, si apenas conocen de una tercera parte de los delitos de la ley penal? No veo, señores, la razón que se ha tenido para haber exceptuado ciertos delitos de la competencia del Jurado; y no voy á molestar al Senado haciendo una comparación extensa de unos delitos con otros: citaré únicamente dos ó tres, para ver si logro convencer á los Sres. Senadores, que aún no están convencidos, de las razones fundamentales en que se apoya mi amena 

¿Hay de nada más grave, señores, que los hechos encaminados á poner en peligro la seguridad de la Patria? ¿Por qué se incluyen los delitos del cap. 1.º, tit. 1.º, lib. 2.º del Código penal, y se excluyen los que comprometen la paz y la independencia del Estado? ¿Qué diferencia sustancial existe entre unos y otros delitos? Yo quisiera que la Comisión tuviese la bondad de manifestarlo.

El delito de traición es inducir á una Potencia extranjera á declarar la guerra á España; introducir tropas extranjeras en el interior de la Nación, ó entregar una fortaleza á un país extranjero. Pues el que diera motivo á una declaración de guerra contra España con actos ilegales, cuyo delito está comprendido en el cap. 2.º, tit. 1.º, lib. 2.º del Código, se halla exceptuado de la competencia del Jurado, siendo de la misma naturaleza este delito que el anterior.

Son también de la competencia del Jurado los delitos contra las Cortes y sus individuos, y contra el Consejo de Ministros, y los delitos contra la forma de gobierno, y se excluyen de dicha competencia los delitos de lesa majestad. ¿Es, señores, que por su gravedad el delito de lesa majestad se toma como norma de los delitos más graves? ¿No produce gran alarma? Pues entonces, ¿por qué admitió ciertos delitos de esta clase la Comisión en su dictamen y excluyó otros de la misma naturaleza?

Pero solo se ha dado una razón; la desconfianza del partido conservador; siempre caemos en la misma desconfianza. Yo creo que esto sería un agraviio para el partido conservador, porque sí es monárquico, como lo es, también es patriota, y sí consiente que los delitos de lesa Nación vayan al Jurado y los de lesa majestad quiere que vayan á los tribunales de derecho, parece que el partido conservador es antes monárquico que patriota, y yo entiendo que podrá ser monárquico y monárquico, pero que es también patriota. Me parece, pues, que se lo infiere una ofensa suponiendo que deja que el Jurado analice en los delitos de lesa Nación no teniendo confianza en él, y no importándole nada lo que suceda, mientras que no opina lo mismo tratándose de los delitos de lesa majestad. (Un Sr. Senador: El partido conservador no ha dicho eso). Pero consiente que vayan al Jurado los delitos de lesa Nación y quiere que vayan á los tribunales de derecho de los de lesa majestad. (El Sr. Silveta, D. Luis: Queremos que vayan todos á los tribunales de derecho). Pues ahí está la falta de lógica de la Comisión, puesto que exceptúa muchos delitos de la competencia del Jurado. Y á esto no sé cómo me contestará la Comisión, porque me dan la razón los señores conservadores con las interrupciones que me dirigen en este momento.

El dictamen concede competencia al Jurado para conocer del delito de sedición y rebeldía, y excluye los atentados contra la autoridad y sus agentes. ¿Qué diferencia hay en lo esencial entre unos y otros delitos? En esto existe una contradicción palmaria.

Sedición: cometen dicho delito los que se alzan públicamente y tumultuosamente para conseguir por la fuerza cualquiera de los objetos que determina el capítulo 2.º, tit. 3.º, lib. 2.º del Código penal.

Rebelión: cometen dicho delito los que se alzan públicamente y en abierto hostilidad contra el Gobierno para los objetos que expresa el cap. 1.º, tit. 3.º.

Y se exceptúa el atentado, ¿Qué es atentado? Permitanme los Sres. Senadores que se lo recuerde, aunque todos lo saben perfectamente.

Atentado: lo cometen contra la autoridad y sus agentes, á tenor del cap. 4.º, tit. 3.º, los que sin alcance públicamente, emplearan fuerza é intimidación para alguno de los objetos señalados en los delitos de rebeldía y sedición y otros.

Pues qué, ¿se quiere más esencial relación entre ambos delitos? No puede haberla mayor; son de la
misma naturaleza, no hay diferencia importante entre ellos; ¿por qué se han exceptuado unos y admitido otros?

Los delitos contra la salud pública, insumisión y violación de sepulturas y otros, ¿qué causan alarmas? Pues no están comprendidos en la competencia del Jurado. ¿No se comprenden en el dictamen el delito de cobecho? Se comprende; y sin embargo, se excluyen los delitos de prevaricación, inidildad en la custodia de documentos, etc. Quizá sepa por deficiencia mía, pero no me explico como respecto de delitos de la misma naturaleza, que pertenecen a idéntico órgano, se establece que unos sean de la competencia del Jurado, y otros no. Esta contradicción desaparecería, admiendo el criterio jurídico del partido conservador refractario al juicio por jurados, aceptando mi enmienda, que somete al Jurado el conocimiento de toda clase de delitos.

Pero dejamos ya la comparación de los delitos, porque siguiendo mostraría a los Sres. Senadores, y vamos a examinar el extremo relativo a los delitos electorales.

El artículo referente á que conociese el Jurado de los delitos electorales, lo propuso el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en el proyecto de ley que presentó al Congreso de los Diputados; y además el Sr. Romero Giron lo había comprendido en el suyo, pero en el dictamen de la Comisión del Congreso se eliminó. Y aquí me permitiré el Sr. Ministro de Gracia y Justicia lo diga, y perdóname, que no tuvo bastante energía para resistir los deseos de aquella Comisión, cuyo dictamen respeta, puesto que el timbre de gloria más importante, á mi juicio, para S. S., sería que sobre el particular admitiese mi enmienda, y con ella el artículo que S. S. había puesto señalando como de la competencia de los jurados los delitos electorales, y de esta manera se conseguiría la sinceridad en la emisión del sufragio.

De lo contrario, ya podemos votar el sufragio universal, y dar las órdenes los Gobiernos a las autoridades de provincias: la sinceridad electoral no estará suficientemente garantizada. No podrás haberla, ó será muy difícil que exista. Con dicho artículo en la ley que discutimos, conociendo los jurados de los delitos electorales, y con la excepción en el art. 5º, relativa á los gobernadores civiles, y de la cual no puede hablar ahora, el jurado vecino de un pueblo en el cual nadie hubiese votado, cuando conociése de delito de falsedad, y se dijera que en aquel pueblo había votación, si esto no hubiese sido cierto, podría emitir su voto sobre esta cuestión de hecho, con verdadero conocimiento de causa.

Por tanto, no cabe haber sinceridad electoral si no se admite dicho artículo por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que lo incluyó en su proyecto de ley, presentado en la Cámara popular.

En este punto sí que sería ministerialísimo del Sr. Alonso Martínez, si S. S. se levantase aquí á sostener aquella disposición, lo cual constituiría, repito, uno de los mayores Timores de su gloria como hombre público, porque así se concluiría con eso que llaman algunos farsa electoral, pues sin haber votado nadie en algunos puntos, se dice, acaso sin bastante fundamento, que aparecían emitidos votos que no lo han sido.

Por otra parte, si el Jurado no conoce de esa clase de delitos, ó lo que es lo mismo, de lo que le interesa tan directamente, ¿dónde está esa intervención del pueblo en la administración de la justicia, y esa soberanía de que nos hablaba el Sr. Aldocon? Por eso, señores, he pedido yo en alguna ocasión indulgo para esos inútiles electores que han podido ser instrumen- tos quizá de cierta presión política. No pudiera ejercerse conociendo el Jurado de esos delitos. Será indudable, repito, que votemos el sufragio universal, si el mencionado artículo no se contiene en el proyecto ó dictamen que se discute.

En la fórmula redactada por el ilustre Sr. Ministro de Gracia y Justicia y el Sr. Montero Rios, en la ley de garantías de nuestro partido, se dice que el Jurado conocerá de todos los delitos políticos y comunes que determinan las leyes. ¿Qué más político que los delitos electorales? Y concretando más la cuestión, el nuevo órgano jurídico de que se ocupó un ilustre y eminente hombre público, que va á establecerse por medios constitucionales para dar intervención en los asuntos del país á todos los ciudadanos dignos, no podrá realizarse sin la sinceridad electoral.

Estas ó parecidas fueron las frases que se pronunciaron por dicho político ilustre jurisconsulto en agosto reciente. Pues bien; no puede haber ese nuevo órgano jurídico si en todas las manifestaciones, tanto del derecho como políticas, no seguimos, como he dicho antes, ese empuje de la democracia. ¿Cómo podrán ser elegidos los más dignos ciudadanos, si se excluye del conocimiento del Jurado el artículo referente al castigo de los delitos electorales? Serán otros ciudadanos, dignos también, pero no aquellos tal vez que representan la voluntad de los distritos. No será la verdad del sufragio universal, y nosotros hemos proclamado desde la oposición la sinceridad del sufragio. Pues si queremos ésta, es preciso que se admita síquiera esta parte de mi enmienda.

Se dice que se rechaza ese artículo por el estado enfermizo de la opinión en general en esta materia. Quienes están enfermos son los Gobiernos y los Ministros sí indican á los gobernadores que hagan votar á tal ó cual; esos son los que están realmente enfermizos, y en el segundo grado de tisis en materia electoral. (Risas.)

Se dice también (y esto no lo censuro porque es una opinión como otra cualquiera), se dice también: el motivo es por no querer exponer al organismo entero del tribunal popular al embate rudísimo de intereses y pasiones colectivas que suelen agitarse en estas porfiadas contiendas de los partidos políticos y de los bandos locales; yo no sé si todos opinarán lo mismo, pero yo entiendo que esas contiendas ó esas luchas en materia electoral ya no están de moda, que reina una tranquilidad suma á veces en las elecciones, pues hay quien dice que ni siquiera se vota en algunos pueblos. Esa tranquilidad existe en tales términos, que también votan los muertos, según se dice por algunos, lo cual, Sres. Senadores, es un escarnio, esto es un insulto á la memoria de nuestros antepasados, y sin embargo, esto se admite como cosa corriente.

En el caso en que la Comisión no tenga á bien admitir mi enmienda, yo creo que esto será el triunfo del caciquismo, más repugnante en esta parte.

Se dirá que puede haber apasionamiento, y que por eso no admite la Comisión mi enmienda. Pero, señores Senadores, puede haber ciertamente el mismo apasionamiento al conocer el Jurado de los hechos
punibles que define y castiga el art. 181 del Código, que dice:

«Son reos de delito contra la forma de gobierno establecida en la Constitución los que ejecuten cual-
quiera clase de actos o hechos encaminados directa-
mente a conseguir por la fuerza, ó fuera de las vías
legales, uno de los objetos siguientes:

1.º Reemplazar el gobierno monárquico constitu-
cional por un gobierno monárquico absoluto ó repu-
blicano.»

Lo mismo cabe decir en los delitos de rebelión que
cometan los que se alzaren públicamente y en abierta
hostilidad contra el Gobierno para destronar al Rey,
deponer al Regente ó Regencia del Reino, impedir la
celebración de las elecciones para Diputados á Cártes
ó Senadores, etc.

Y las mismas consideraciones cabe hacer respec-
to á los delitos de las partidarias, con ocasión del
ejercicio de los derechos individuales garantizados por
la Constitucion, delitos de los funcionarios públicos
contra el ejercicio de los mismos. delitos relativos al
ejercicio de los cultos y otros análogos.

Si los jurados son monárquicos y los rebeldes son
partidarios, ó de D. Cárles ó de Ruiz Zorrilla, ¿no po-
dría haber también pasión? Y si no hay apasionamen-
to para una clase de delitos, ¿cómo puede haberla
para otros delitos de carácter político? Por consecuen-
cia, entiendo que es deficiente el dictamen de la Co-
misión.

¿No han leído los señores de la Comisión en la
ley electoral, que no es precisa la autorización para
procesar al empleado que falle al cumplimiento de su
debida en materia electoral? ¿No se ha dado con
esto un gran paso en ese sentido? Pues dé la Comi-
sión un paso más, y admita la enmienda, siguiendo
en esta parte que se refiere á los delitos electorales, con
tanta razón, cuantó que esta es una cuestión de
moralidad pública y un compromiso de partido.

Se ha dicho por el dignísimo jefe del partido pos-
sibilista él ilustre hombre público, Sr. Castelar, si no
recuerdo mal, que siempre que el partido dominante
lo presentase algún proyecto en sentido más liberal,
él sería benévolo con el Gobierno, y lo admitiría. Pues
yo aludo directamente á los Sres. Abarzuza y Alme-
gro, que aquí representan dignamente, como el señor
Láido, al partido posibilista, para que digan si es-
tán ó no de acuerdo con el sentido de mi enmienda;
si no encuentran esta enmienda bastante democrá-
tica, yo deseo que lo declaren SS. SS. Por eso se ten-
ido interés político, como Senador liberal y monárquico,
aunque el último de todos vosotros, en presentar esta
enmienda, para que no paréciera exclusivo del partido
republicano el principio de que el Jurado tuviera
competencia para conocer de toda clase de delitos.

Si me fuese posible aludir también á los Sres. Se-
nadores procedentes de la izquierda; en una palabra, á
todos los de procedencia democrática, yo los suplicaría
que dijese si en el fondo de su conciencia están de
acuerdo con mi enmienda; yo le suplicaría asimismo al
Sr. Rojo Arias, que me llamaba disidente y casi conser-
vador, porque no había votado el art. 1.º del proyecto;
yo le suplicaría, repito, al Sr. Rojo Arias, que es de
ómocrata de toda la vida, que dijese si admite esta
enmienda, y si no la admite que lo declarase, porque es
preciso que aquí sepamos quiénes son partidarios del
Jurado democrático, en este sentido, y los que no lo
son, porque es muy cándido guardar silencio. (El as-

\*\* Rojo Arias: Pido la palabra para una alusión per-
sonal reiterada.) Y tan reiterada, Sr. Rojo Arias.

Voy á concluir, porque os he molestado ya bastan-
tante.

Yo creo que al Gobierno y la Comisión no les
quedan ya más que dos medios: como se ha dicho ya,
la benevolencia conservadora; ó cumplir con los com-
promise del partido liberal: yo no sé cuál de estos
do medios escogerán la Comisión y el Gobierno
de S. M.

El Sr. ALDECOA (de la Comisión): Pido la palabra.

El Sr. VICERESIDENTE (Pavia y Pavia): La
tiene S. S.

El Sr. ALDECOA: Señores Senadores: la Comisión
ha manifestado, prívevalemente, que no podía aceptar
la enmienda del Sr. Maluquer, y ahora insiste en su
misma contestación, aun después de haber oído las
razones que S. S. ha expuesto en apoyo de su en-
mienda.

Empezó el Sr. Maluquer manifestando que había
una notoria y palpable contradicción en la Comisión,
de parte el instante en que acepta y defiende como buena
la institución del Jurado, y esto no obstante, no atri-
buye á este tribunal el conocimiento de toda clase de
delitos. Yo convengo con el Sr. Maluquer en que la
lógica del principio obligaría indudablemente á de-
clarar de la competencia del Jurado, todos, absoluta-
mente todos los delitos. Si en principio y en abstracto
se dice y se defiende, que la institución del Jurado es
la forma mejor conocida para administrar justicia, la
consecuencia lógica, pero meramente lógica, de este
principio, es que debiera indudablemente entender de
todos los delitos que define el Código, y aun de todos
los delitos definidos en las leyes especiales. Pero jore
S. S. que en este mundo real hay principio alguno
absoluto, por bueno que sea, que pueda llevarse hasta
sus últimas consecuencias? El mismo Sr. Maluquer ha
alardeado esta tarde, y con muchísima razón, de sus
participaciones liberales, de su consecuencias, y es por-
que el Sr. Maluquer tiene una gran fe en los prin-
cipios de libertad, principios de libertad, que, en mi
concepto, lo mismo influyen en el orden jurídico, que
en el orden económico, que en el moral, y que en to-
da las esferas de la vida, y sin embargo, S. S. de-
fiende aquí, y ése es uno de los adalid más acérrimos de
las ideas proteccionistas. ¿Es esto decir que S. S.
reniega de su amor á la libertad? No, por cierto. Es
que todos los principios, cuando se tocan en la reali-
dad, no hay más remedio que estudiar las condiciones
del tiempo y del lugar, y detenerse allí donde se pre-
sente un obstáculo que pueda poner en peligro la in-
situación; y cuando se presenta alguno de estos obstá-
culos, ver si se puede eludir, aunque sea desviando
algún tanto la marcha y dirección de estos organismos,
y no intentar, sobre todo, atropellar y pasar por
encima de ellos á riesgo de que la institución pe-

A S. S. le parece, y esto es para demostrarle que
no hay contradicción en la Comisión, que las condi-
ciones del país no son á propósito para llegar al ideal
del libre cambio, y defiende el proteccionismo, y no
por esto reniega de sus ideas liberales; y yo creo que
S. S. el día en que se convenciera de que nuestro país
podía luchar en ese terreno con los demás, sería el
primero que defendería las ideas del libre cambio.

¿Cómo, ¿que demuestra la que aunque la lógica im-
pone ciertas consecuencias, no tenemos más remedio

S. 219
que realicemos a la realidad y sacrificemos la lógica a la misma realidad. Esto ha hecho la Comisión.

Repito que en principio es indudable lo que ha sostenido el Sr. Maluquer, y es que si el Jurado es bueno como forma la más adecuada para administrar justicia, la lógica impone el deber de llevar al conocimiento del Jurado todos los delitos. En primer lugar, S. S. no desconocerá que el Jurado, como repitidamente se ha manifestado aquí, tiene sus inconvenientes, y uno de ellos es la carga verdaderamente pesada que se impone sobre los ciudadanos llamados a desempeñar las funciones de jurados; y si esta carga la hacemos todavía más pesada imponiendo al tribunal del Jurado la obligación de la misión de conocer de todos los delitos, es muy posible que el Jurado fracase en sus cometidos y yo creo que S. S. lo que deseará, como todos los que defendemos dicha institución, es evitar, en lo posible, en la realidad, cualquier causa o motivo que pudiera redundar en su desprecio.

La prueba de que el Sr. Maluquer aboga en este mismo criterio de la Comisión, es que no nos ha presentado una enmienda tan radical como parece deducirse de los razonamientos que hemos tenido el gusto de oírle en apoyo de la misma. ¿Qué es lo que dice la enmienda del Sr. Maluquer? El tribunal del Jurado conocerá: primero, de todas las causas por los delitos que se delinen y castigan en el Código penal, excepto los que tengan señaladas las penas de arresto y multa; y, pues, por qué el Sr. Maluquer no es consecuente con el principio de que el tribunal del Jurado debe atribuirse el conocimiento de todos, absolutamente de todos los delitos? (El Sr. Maluquer: Porque irán al Escabínato, según el propósito del Sr. Ministro.) O no irán; porque no irán, seguramente, todos los delitos castigados con penas de arresto. (El Sr. Maluquer: La mayoría.) La mayoría será seguramente de la competencia de los tribunales ordinarios; por consiguiente, ¿cómo el Sr. Maluquer se atreve a decir que la Comisión es inconsciente con el principio que defiende, si él mismo en su enmienda exceptúa de la competencia del Jurado todos aquellos delitos que sean castigados con las penas de arresto y de multa?

Cuando ha leído esta primera parte de la enmienda de S. S., he comprendido que en realidad tenía el mismo criterio que la Comisión en cuanto a la conveniencia de sustraer de esta competencia del tribunal del Jurado cierto número de delitos, siquiera no sea más que para que no se les abrumen a los ciudadanos y vecinos llamados a juzgar a los demás casos. En otras palabras, con una carga demasiado pesada. Así entendido la enmienda del Sr. Maluquer, y en lo único que veo que existe diferencia, es en el criterio aceptado por S. S. para hacer esta distinción y separación. El criterio del Sr. Maluquer es el de la mayor o menor gravedad de las penas, que es indudablemente lo más fácil y lo más sencillo; pero, en la Comisión le he parecido que era más racional, más filosófico y más científico, determinar esta separación por figuras de delito, porque si bien es verdad que la mayor o menor gravedad de las penas, significa, por regla general, una mayor o menor gravedad de los delitos, también convendría confiarmelo el Sr. Maluquer en que las penas, por sí solas, no dan idea de la índole y naturaleza de los respectivos delitos, y que sí hay necesidad de sustraer del conocimiento del Jurado cierto número de ellos, es más científico y más técnico hacer esta distinción por figuras de delitos, porque así se consigue el objeto de sustraer de su competencia algunos hechos que por su índole y por su tecnicismo especial, son constituidos, no solamente por conceptos de hecho, sino también por conceptos esencialmente jurídicos.

No desconozco, no niego que ambas bases son razoables y están aceptadas incontestablemente en las legislaciones extranjeras, y acaso en los primeros tiempos del Jurado se aceptó más generalmente la base de la mayor o menor gravedad de las penas; pero hoy la opinión se ha manifestado en el sentido y conforme al criterio aceptado por la Comisión, porque así se permite apreciar la índole y naturaleza de cada delito, para sustraer de la competencia del Jurado aquellos que sean de más difícil apreciación, siquiera en la realidad no se encuentre la imposibilidad de que un presidente, al formular las preguntas, lo haga de manera que distinga bien en cada caso el hecho del derecho.

Pero hay otra razón mucho más poderosa para que la Comisión se haya creído en el caso de sustraer de la competencia del Jurado ciertos delitos. Es menester, Sres. Senadores, no haremos la ilusión de que el Jurado es una institución perfecta, es una institución acabada, que no ha de ofrecer sus dificultades en la realidad de la vida. Estas dificultades ya las hemos sentido cuando el ensayo de 1873, y no en vano se han aprovechado las lecciones de la experiencia de entonces para hacer en el proyecto las modificaciones aconsejadas por esa misma experiencia.

La verdad es, Sres. Senadores, que en los veredictos del Jurado influye, como no puede menos de incurrir, porque es irremediable, el sentido de la opinión pública, y cuando este se encuentra, por unas causas o por otras, realmente perturbado, sería prudente encomendar a esa conciencia pública perturbada el conocimiento de estos hechos. Pues tal sucede con los delitos electorales. Ya lo dije la otra tarde; a mí me cupo la honra de funcionar en Asturias como individuo del ministerio fiscal en la época del Jurado de 1873, y puedo asegurar a S. S. que no hubo allí ninguno veredicto verdaderamente injusto, tratándose de delitos comunes y ordinarios; pero tratándose de delitos electorales, a pesar de que fueron muchas las causas de que conoció el Jurado, una sola vez declaró la culpabilidad. Me parece que está en la conciencia de todos los Sres. Senadores que por causas que no hay necesidad de explicar, que no se pueden imputar a éste, ni a ningún partido, la opinión pública en materias electorales está profundamente perturbada, hasta el extremo de que los hombres más dignos no se creen deshonorados haciendo escarnio con objeto de sacar trino fato de la urna tal vez de aquel nombre.

Pues, Sres. Senadores, si esta es la realidad, si no se puede desconocer la trascendencia e importancia de este vicio verdaderamente social, ¿no renegaremos de nuestro sistema representativo, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, castigar con mano firme estos desmanes; y en segundo lugar, hacer que sea una verdad la sanción penal. ¡Y se puede esperar, señores Senadores, esto de una opinión completamente pervertida? Esta opinión emplea eludiendo los preceptos legales, y concluye, si se le atribuye la mención de juzgar, estimando asimismo la sanción penal marcada en el Código. Esta es la razón que tuvo la
Comisión del Congreso para enmendar el proyecto del Gobierno, que atendió única y exclusivamente para consignar estos delitos a su índole política, á fin de sustraerlos del conocimiento del Jurado, y es la razón que ha tenido la Comisión del Senado para mantener esta misma sustracción en el dictamen que se discute.

Y lo que digo de los delitos electorales es también extensivo á los delitos de atentado y desacato, á que se ha referido el Sr. Maluquer, porque no me parece, Sres. Senadores, en honor de la verdad, que el principio de autoridad representado por agentes subalternos esté en España tan respetado y considerado, que se pueda sin inconveniente encomendar al tribunal del Jurado el conocimiento de esta clase de delitos.

Pero decía el Sr. Maluquer: ¿puede sustraerse del conocimiento del tribunal del Jurado esta clase de delitos y los daís el conocimiento de los delitos de rebelión y sedición, que en realidad son un atentado dirigido también contra la autoridad? Y yo pregunto á mí vuel el Sr. Maluquer: pues que, ¿a qué salta á la vista de S. S. la diferencia esencial, profunda y radical que hay entre unos y otros delitos? En los delitos de rebelión y sedición, esa la sociedad en masa la que verdaderamente sufre el choque de estos atentados y la que por esta razón tiene motivos muy justificados de alarma, que indudablemente la movería á castigar todos los desmanes que en tal sentido se cometen; mientras que los delitos de atentado y desacato son personalísimos, y, por regla general, se cometen, no contra autoridades superiores, sino contra agentes subalternos que, como he dicho antes, no están, por causas que tampoco hay necesidad de explicar ahora, tan respetados como debieran estarlo en España y fuera de desear.

También nos ha citado el Sr. Maluquer el ejemplo del cochecho, en oposición con la prevaricación; pero ¿qué diferencia no hay, Sres. Senadores, entre un delito de cochecho y un delito de prevaricación? En el delito de prevaricación lo que se va á decidir y castigar es si se ha dictado ó no sentencia ó provisión injusta á sabiendas ó por negligencia, y no me negará el Sr. Maluquer que esta es una cuestión esencialmente técnica en que difícilmente podrían entrar los jurados; y bé aquí la razón del criterio que la Comisión ha seguido para hacer la selección, no por gravedad mayor ó menor de penas, sino por figuras de delitos; mientras que en el delito de cochecho se pena que un funcionario público, un juez ó magistrado haya recibido ó dejado de recibir tal ó cual dáviva. ¿Tiene, pues, comparación la índole de un hecho con la índole del otro para el efecto de la competencia y capacidad que hay que reconocer en los jurados, según que conozcan de uno ó de otro delito?

El Sr. Maluquer nos ha hablado de otros delitos, respecto de los cuales yo no tengo inconveniente en reconocer que indudablemente hubieran podido ser sometidos al conocimiento del tribunal del Jurado; pero en la necesidad de resaltar un número bastante considerable de delitos para que no se abrumara la función impuesta al ciudadano llamado á juzgar á sus convecinos, la Comisión ha tenido necesariamente que ser un tanto discrecional al hacer esta selección; y no me parece que esto pueda ser motivo de crítica, y mucho menos por el Sr. Maluquer, que abunda, sin duda, en las ideas y en el criterio de la Comisión, cuando excluye, con arreglo á la primera parte de su emmienda, todos aquellos delitos que tengan marcada pena de arresto ó multa.

Deje, pues, el Sr. Maluquer que se plante el Jurado; deje que se desvanezcan esas preocupaciones que hoy existen en muchos contra esta institución; deje que se formen, como seguramente se formarán, las costumbres, como se van formando las costumbres en los testigos que hoy comparecen en el juicio oral, y da llegará, después que esto suceda, en que podamos atribuirle, si no todos, la lúmene mayoría de los delitos definidos como tales en el Código penal.

Considero S. S. que también en el seno de la mayoría, como entre los individuos que han votado el art. 1.°, hay quien aspira á la realización de este ideal; que en el seno de la Comisión hay también quien desearía establecer el Jurado, no solamente para los delitos, sino para los asuntos civiles, y sin embargo, no se oponen unos ni otros á que el Jurado se plante y rompa su marcha; porque confiando, como confiábamos todos, en las excelencias de su resultado y en los buenos efectos que ha de producir, es seguro que después que se acredite podremos llegar á ese ideal con aquiescencia de los mismos señores que ahora contradicen la institución, que yo les hago la justicia de creer que cuando se convenzan de que la razón está de nuestra parte, nos la darán; así como nosotros, á nuestra vez, si tuviéramos un desengaño, no perderíamos sostener á todo trance una institución que diera frutos para la administración de justicia; porque á todos nos mueve un mismo deseo, el de que se mejoren las condiciones y la organización de nuestros tribunales.

El Sr. MALUQUER: Pido la palabra para rectificar.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. MALUQUER: Doy gracias al Sr. Aldecoa por la extensión con que se ha servido contestar á mi humilde discurso, demostrando nuevamente sus conocimientos en materia de Jurados, así como también ha dado otra prueba de su habilidad parlamentaria, puesto que diciendo S. S. que era lógico, completamente lógico lo que yo pido al Senado, ha manifestado, sin embargo, que la Comisión no podía admitirlo.

Pues me quedó con la lógica, aunque no se vote, porque me parece que tengo bastante con que sea lógico lo que yo pretendo, y que lo que ha hecho la Comisión ha acordado sea lógico, como ha reconocido S. S.

Ha dicho el Sr. Aldecoa, y empiezo por la última de sus apreciaciones, que estoy de acuerdo con la Comisión, puesto que digo en mi enmienda que de los delitos á que se asigna como pena el arresto y la multa, no conozco de ellos el Jurado. Pero yo entiendo que de estos delitos, atendido el proyecto de base sobre organización de tribunales del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, conocería una especie de Escabino, es decir, un juez municipal con dos adjuntos, y que, por consiguiente, sería un pequeño Jurado. Por esto decía: en el caso de que se admita mi enmienda por la Comisión, todos los delitos en general tendrán que ir al Jurado. Este ha sido el principio en que he fundado mi enmienda. Y tanto estamos de acuerdo la Comisión y yo, que me he inspirado en un discurso brillantísimo del Sr. Mosquera, discurso en la Comisión, y por consiguiente, los cargos que el señor Aldecoa me ha dirigido los ha dirigido al Sr. Mosquera, y siento que dicho señor no esté presente; pero como hay quien le pueda defender, manifestaré que
me he fundado en un discurso elocuente, como todos los de tan illustre jurisconsulto, pronunciado por dicho Sr. Senador en la sesión de 4 de Mayo de 1883, en que dijo:

«Yo sí fuese á emitir mi opinión sobre el particular de un modo conciso, y tuviera probabilidades de que prevaleciese, habría optado porque se concediera competencia al Jurado para conocer de toda clase de delitos, hasta los de prisión correcional inclusivos, dejando solamente aquellos que tienen la pena de arresto, multa y faltas, para los tribunales ordinarios.»

«Pero no habiendo tenido por conveniente el señor Ministro de Gracia y Justicia ni mis compañeros de Comisión atender á estas indicaciones, hubo de manifestar que en todo lo que se refiere á este artículo de la ley, yo me abstendría de impugnarla; que reservaba mis ideas por si había alguna enmienda en armonía con ellas para poderla votar.»

Pues ahí está mi enmienda; siendo que no está su señoría en el Senado para darme la razón, de que está de acuerdo en lo fundamental con la enmienda que he tenido el honor de presentar.

Además, mi digno amigo el Sr. Balaguer, Ministro de Ultramar, en la sesión del Congreso de 16 de Noviembre de 1875, dijo en nombre del partido constitucional: «admitimos y queremos plantear el Jurado para toda clase de delitos.» Pues vamos á ver qué hace ahora el Sr. Balaguer, que se fué á la izquierda porque el partido liberal no lo era bastante; respetando yo sus móviles patrióticos, me permitiría preguntarles si está S. S. de acuerdo con las ideas democráticas que yo sostuve sobre el Jurado, que eran sus suyas, y creo que continúan siéndolo, ó con la transacción que ha hecho el Gobierno en esta parte con los señores conservadores. De modo que en la oposición, se ve que todo el mundo es demócrata y liberal y se ofrece todo; pero llegando al Poder se dividen algunos ciertos compromisos políticos. Si habló el Sr. Ministro de Ultramar, en otro tiempo, en nombre del partido constitucional sosteniendo el criterio de que el Jurado debía conocer de toda clase de delitos, ¿cómo no protesta ahora, que se sigue por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia un criterio opuesto?»

Ha manifestado el Sr. Aldecoa que en este mundo todo es relativo, y que sin duda por esta razón yo he defendido y defendiendo las ideas liberales, y sin embargo, soy protectorismo.

Con permiso del Sr. Presidente, porque cuando habló de protectorismo S. S. acostumbró á tocar la campanilla, pero para contestar al Sr. Aldecoa...

El Sr. Presidente: El Presidente no toca la campanilla cuando se habla de protectorismo, sino cuando algún Sr. Senador, en lugar de rectificar, hace un nuevo discurso.

El Sr. Malquer: De modo que puedo hablar, Sr. Presidente, de protectorismo, contestando al señor Aldecoa.

El Sr. Presidente: Contestando, no, porque su señoría no tiene derecho á contestar, sino que lo que puede hacer es rectificar. Esto dispone el Reglamento, que la Presidencia tiene que hacer observar.


El Sr. Aldecoa declara: «El Sr. Malquer, muy liberal, defiende la protección en materias económicas.» Pero es el caso que yo siempre he defendido lo mismo, y en cambio hay algunos que se han llamado librecambistas, han ido á los meetings, y luego, siendo Ministros, han dicho que son oportunistas. Yo me alegro mucho de estas declaraciones patrióticas, y esto prueba que van haciendo su camino las ideas protectoristas, que yo he defendido sin vacilaciones; y si ahora no se admite mi enmienda, quizás algún día también se admita, como se admiten en parte las ideas protectoristas en materias económicas.

Tampoco prosperó mi proposición de ley sobre responsabilidad ministerial que presenté á esta Cámara, y sin embargo, está haciendo su camino, puesto que ya figura ese punto en el crédito de nuestro partido. Ayer mismo, los Sres. Ministros de la Gobernación y de Fomento dijeron que no había más remedio para la agricultura que protegerla; y entonces dije: muy bien, porque con esa declaración, á mi juicio, se vienen á nuestro campo protectorista. Bien vendidos sean.

Dice el Sr. Aldecoa (y voy á concluir, porque no quiero molestar más á los Sres. Senadores), que respecto á los delitos electorales, está perturbada la opinión del país. Pues si está perturbada, ¿dónde salen los jurados, si no de la masa de los ciudadanos? Esto no puede ser, Sr. Aldecoa. Si los ciudadanos por una parte, según ha asegurado S. S., son hoy tan instruidos y tan aptos para ejercer la augusta misión de jurados interviniendo en la administración de justicia, ¿cómo dice S. S. por otro lado, que la opinión, según símbolo se dice en otro parte, está enferma? Si la opinión es mala y no hay bastante: criterio jurídico en el país, no entreguemos la justicia al Jurado. Lo contrario sería ilógico.

No tengo más que añadir; sino repetir las gracias al Sr. Aldecoa por su atención al contestarme con su elocuente discurso.

El Sr. Aldecoa (de la Comisión): Pido la palabra.

El Sr. Rojo Abría: Pido la palabra para alusiones personales.

El Sr. Presidente: El Sr. Aldecoa tiene la palabra.


Decía S. S. que había presentado la enmienda en el sentido que sabe el Senado, porque en su concepto, con arreglo á las bases que aquí se discutieron de la ley orgánica, todos los delitos punidos con arresto y multa, deberán ir al conocimiento de este tribunal de Escabinito, que según las bases, no del Código penal, sino de la ley orgánica, ha de establecerse en su día. Pues esto es lo primero que tengo que rectificar á S. S. Lo que ha de ir al conocimiento de esos tribunales municipales reorganizados, según la base aprobada por el Senado, si es que se aprueba por el Congreso, no son todos los delitos penados con arresto y multa, sino algunas figuras limitadas de delitos de las que aparecen incluidas hoy entre los hurtos, las estafas y los daños. Pero ¿no sabe S. S. (y lo creo que lo sabe perfectísimamente) que casi todos los delitos definidos en el Código, en alguna de sus gradaciones, tienen señalada pena de arresto? Pues lo que se infiere de la enmienda de S. S., es que aun cuando hubiera algunos delitos, por ejemplo, castigos con pena de prisión correcional, según su enmienda, se trataba de un delito frustrado ó tentativa, y por tanto, había que pedir una pena de arresto ó multa, de esos delitos conocería, no el tribunal del Jurado.
NÚMERO 40 837

sino el tribunal de derecho, los tribunales ordinarios, ¿Le parece á S. S. que es científica esta distinción, no por razón de delito, sino única y exclusivamente por la gradación que en cada uno de los delitos admite y acepta el Código penal?

Decía el Sr. Maluquer que yo á quien he combatido no ha sido á S. S., sino al Sr. Mosquera, dignísimo presidente de esta Comisión, que es quien susten- to en el discurso aludido, y cuyos párrafos nos ha leído, las mismas doctrinas de S. S. Desde luego yo he hecho la salvedad, ó mejor dicho, la manifestación de que no solamente entre los individuos de la Comisión hay quien quiera ir más allá de á donde va el proyecto, sino que tengo el convencimiento de que entre los individuos de la mayoría hay personas que se encuentran en la misma situación; pero tanto los individuos de la Comisión como esos otros de la mayoría han creído que lo esencial es plantear el Jurado, y que porque el Jurado dé de conocer de un delito más en estos primeros momentos, no se afecta en lo más mínimo á las condiciones que constituyen su esencia y han respetado nuestra opinión, la de los que creemos que por aumentar el número de delitos de competencia del Jurado acaso podría ponerse en riesgo y en peligro este principio de vida de la institución.

No hay, pues, consiguientemente, bajo este aspecto y consideraciones, contradiccion alguna ni entre los individuos de la mayoría ni entre los de la Comisión, sino manifestaciones del patriotismo de todos estos señores, del deseo que abrigan de que la institucion del Jurado sea un hecho, así como del convencimiento profundo que tienen de que si la experiencia lo acredita llegaremos á ese ideal de que el tribunal del Jurado conozca en su día de toda clase de delitos.

Concluyó el Sr. Maluquer diciendo: pues si el Sr. Aldecoa cree que está tan perturbada la opinión en materia electoral, ¿cómo defiende la institución del Jurado, si los jurados van á salir precisamente de esa masa de ciudadanos cuya opinión se encuentra perturbada? Pero, Sr. Maluquer, ¿dónde está la lógica de esta consecuencia? Pues qué, ¿no es posible, y no solamente posible, sino real, que en materia electoral todos tengan, como vulgarmente se dice, mangas acá, hasta el punto de que, como ya dije en mi discurso, las personas más dignas no se creen deshonradas haciendo esos escándalos tan comunes en materia electoral, y sin embargo tengan conocimiento de su deber para aplicar las leyes á todos los demás casos á que se refieren los delitos definidos en el Código penal?

Estas son las principales rectificaciones que me interesaba hacer, y me siento, por no molestar más tiempo vuestra atención.

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Rojo Arias tiene la palabra para alusiones personales.

El Sr. ROJO ARRIAS: Voy á usarla, Sres. Senado-

dores, y estas frases mas van principalmente dirigidas á la Mesa; precisamente para no reservarme el uso de un derecho, el que tenía de pronunciar un discurso sobre este asunto.

Voy solo á sincernarme de los cargos de inconsecuencia, de que amistosa, pero energicamente y con reiteración me ha dirigido el Sr. Maluquer, todo polo-

que alguna vez en el seno de la amistad, con que su señoría me honra, y á la que yo corresponda con todo mi corazón, le he criticado en este tono, esa especie de indolencia de S. S., hija, no de su voluntad, sino de la rectitud de su conciencia, de su puritanismo político.

Yo, Sr. Maluquer, abundo en las ideas y en los deseos de S. S.; quiero el juicio por Jurados para toda clase de delitos (El Sr. Maluquer: ¿Uncondicional?) Sin más condiciones que las que me impongan mi decoro y mis opiniones, salvándolas, como las salvo ahora, que estoy al lado de esa mayoría rudamente combatida, porque ha entrado en el camino de sus ideas políticas, que son las misas, y enfrentar de la cual estuve mientras creí que no podía ir á él; la veo en ese camino, y yo no le de oponer el menor obstáculo para que en él perseveré. Si mañana yo entiendiese que desista de seguir ese camino, que considero su salvación y su honor, entonces yo, con pena, no sería disidente, si no que sería adversario declarado de esa mayoría.

Ya sabe el Sr. Maluquer cuál es mi actitud. Estoy de todo en todo conforme con el espíritu de su enmienda; deseo que el Jurado se plantee para toda clase de delitos; declaro, y perdóname la Comisión que así lo diga, que las razones de su digno miembro Sr. Aldecoa (que está dando pruebas diarias de la flexibilidad de su entendimiento y de sus condiciones verdaderamente extrañas, dadas las ocupaciones habituales de toda su vida, y relevantísimas como orador parlamentario) no me han convencido en el fondo, sin embargo de lo cual no votaré la enmienda del Sr. Maluquer, á pesar de estar conforme con sus opiniones, porque no quiero crear el menor obstáculo al Gobierno para la pronta terminación de este proyecto de ley, que considero muy superior y más liberal que todos los anteriormente presentados, por más que, consultando sin duda intereses que se escapan á mi penetración, viendo quial peligros que se pueden ver mejor desde la posición que tiene el Gobierno que desde la modesta que yo ocupó, lamentó que no se haya atrevido á aplicar este proyecto á toda clase de delitos.

Creo, Sr. Presidente, que he expuesto con claridad cuáles son mis ideas.

No debo entrar en la apreciación de los conceptos de la Comisión, sin embargo de que he dicho que no me satisface; es decir, que no me satisfacen hasta el punto de que crea que debe subordinarse este grato bien del Jurado aplicado á todo género de delitos; pero sí le diré una cosa al Sr. Aldecoa. La razón más fuerte que ha dado S. S. es la de no aumentar el trabajo del Jurado, de los jueces del Jurado, pequeña razón; cuan-
do hay medios de hacer que ese trabajo no pase tanto sobre los llamados á constituir ese tribunal. El señor Aldecoa se ha olvidado un momento de que ese tribunal no lo componen solo los jurados legos, sino que lo forman también tres magistrados, tres jueces de derecho, que son los que califican.

Y aquí recuerdo al Sr. Aldecoa sus teorías de to-

220
dos estos días, con las cuales estoy de completo acuerdo, que le demostrarán que estas diferencias entre la nación y el Cobre, entre los delitos de rebaja y sublevación y el abandono a la autoridad, no podían ser un peligro, como no podían ser tampoco los delitos electorales; que más fue yo la justificación de las costumbres políticas a aquel a quien interesa corre-girlas, esto es, al Jurado (Jurado que no sé por qué se ha de creer que ha de componerse de individuos de un solo partido); más fío yo, digo, el remedio de esas costumbres políticas a las influencias de un Jurado que a las sentencias de los tribunales, si es que llegan á dictarse, respecto a las que no es extraño que un indulto pueda venir á borrar toda huella de lo pasado para que se vuelvaácacer en aquel abuso.

He salvo mis opiniones; he dicho lo que tenía que manifestar; deseaba ver satisfecho al Sr. Maluquer, y me siento.

El Sr. MALUQUER: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. MALUQUER: El Sr. Rojo Arias ha dicho que está de acuerdo con el espíritu de mi eminencia, pero que votaría en contra si hubiese votación nominal por no oponer obstáculos á la marcha del Gobierno, esperando que vendrá el día del perfeccionamiento del Jurado, y, por lo tanto, el que podrá aceptarse mi enmienda. Ya sabe el Senado y la mayoría que si fuera necesario un voto para que se aprobase este proyecto, naturalmente tendría mi modesto concurso.

Y en cuanto á la segunda parte de su discurso, en que S. S. ha dicho que si no estuviése de acuerdo con alguna idea del Gobierno el Sr. Rojo Arias se iría á otra parte, indudablemente se le han olvidado nuestros principios sobre materia de disciplina de partido, porque al Sr. Rojo Arias, como al Sr. Morel, seguramente se le dijo en otra sesión... (El Sr. Rojo Arias. Las comparaciones son odiosas.) No hago comparaciones, señor Rojo Arias; pero voy á decir á S. S., y al Senado lo que yo sé en punto á disciplina de nuestro partido; la última palabra:

«Aquí podrá haber una mayoría que más ó menos acertadamente apoye al Gobierno; aquí podrá haber una mayoría que llevando á la exageración la idea de orden combinada con la del Ministerio, apoye al Gobierno; pero es una mayoría independiente, que tiene conciencia, que discute, que razona, que se convence con la razón y con la discusión.

Pues si estamos aquí en este caso, no hay para qué confundir las cuestiones de principios y de Ministerio. Absolutamente deben tratarse separadas, porque de esta manera el Diputado obra con arreglo á su conciencia; no se verá en la necesidad de sacrificarse por consideración al Gobierno ni de sacrificarse al Gobierno por consideración á su conciencia; así el Diputado no tiene necesidad de saltar por encima de sus principios para apoyar al Gobierno, ni saltar por encima del Gobierno para apoyar sus principios.»

Estas son palabras del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que por lo visto S. S. ha olvidado; y no tengo más que decir en materia de disciplina de las mayorías parlamentarias.

El Sr. ROJO ARIAS: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. ROJO ARIAS: Señor Maluquer, yo no he tenido que olvidar ordenanza ninguna, porque no he estado sujeto ni siquiera á las de los partidos políticos. Yo no creo que haya leyes escritas, sino actitudes impuestas por la lógica, por el interés de partido y por el decoro personal, y yo le digo al Sr. Maluquer: bien claro he expresado que si yo estuve enfrente de este Gobierno, y estuve de una manera franca, fué porque no le veía en el camino de cumplir sus promesas ni de realizar sus reformas políticas; ha vetado á ese camino, me he confundido con él y con él estoy. ¿Qué tal á esos principios? Me apartaré de su lado. Pero, ¿es una cuestión de principios lo que separa al señor Maluquer de este Gobierno, con ocasión del proyecto de ley que discutimos? Pues entonces, ¿por qué no me acusa de que estoy con el Gobierno y no votó la enmienda de S. S.? (El Sr. Maluquer: No lo acuso.) Sí no me acusa de S. S., me hace un cargo, y permitarme su señoría que le diga que no es justa. (El Sr. Maluquer: Ha sido en mi defensa.) Pero aunque haya sido en defensa de S. S., no por defenderse de usar un arma que no responde al ataque; yo no ha dirigido á S. S. ninguno ni he acusado sin un arma igual. Yo no he hecho cargo de inconsecuencia; lejos de eso, he dicho al Sr. Maluquer que estuvo conforme con el espíritu de su enmienda, que deseó que el Jurado se estableciera cuanto antes para toda clase de delitos; pero que hallando un adversario en frente de esta institución, cuando el Gobierno se encuentra en el campo liberal, en que está, no de veerme yo á poner obstáculos por el mayor ó el menor, sino que, por el contrario, de procurar que este proyecto llegue á ser ley lo más pronto posible, por lo mismo que lo considero un bien.

Después de explicar á S. S. mi actitud y mi ideas, puedo afirmar que sin faltar á la disciplina, y no ya á la disciplina, sino á los principios, quiere el señor Maluquer, autor de esta enmienda, que yo, individuo de la mayoría, porque digo que estoy con él, por más que le indique con mi ejemplo que deseó que la retire, me vaya del partido, solo porque he dicho que estoy conforme con S. S. (El Sr. Maluquer: Si es al revés.) ¿Cómo es que al revés? Su señoría ha puesto en contradicción palabras mías con otras pronunciadas por un Sr. Ministro en otra Cámara; S. S. me ha dado una lección de disciplina, y me ha hablado de que este acto mío (me parece que de ménos trascendencia que el de S. S.) me obliga, dentro de las únicas leyes que pueden imponerse como miembro de un partido, me obliga á separarme del partido liberal por el hecho de pensar como S. S., sin embargo de que declare que no vendré á ayudar á la labor del adversario dando contra este proyecto ningún voto, puesto que he demostrado cuáles son en este punto mis actitudes y mi opinión, por el hecho de haber presentado una enmienda; y al ver la oposición que habla contra el Jurado, y por algunas consideraciones quizá que no he querido exponer, retiré mi enmienda á este proyecto, que reitero, y vuelvo á repetir, tengo por más liberal que otros que se pretende que pasen por muy liberales, presentados á las Cámaras españolas.

El Sr. MALUQUER: Deseo dar una breve explicación al Sr. Rojo Arias.

El Sr. PRESIDENTE: Tienen S. S. la palabra.

El Sr. MALUQUER: Siento mucho no haberme explicado bien, porque no me ha comprendido el señor Rojo Arias.

Yo he entendido que el Sr. Rojo Arias había dicho que el que no esté en un asunto determinado de
acuerdo con su partido, que se vaya de él. Me he figu-
rado que se refería á mí; por eso he citado las pala-
bras del discurso del Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en que se dice que pueden los Sres. Sena-
dores y Diputados votar con arreglo á su conciencia
en algunos casos contra el Gobierno, sin dejar de per-
tenerse por esto al partido mientras las cuestiones de
que se trate no afecten al dogma del mismo. En ese
sentido he querido yo hablar, y creo que el Sr. Rojo
Arias se considerará satisfecho con estas explicacio-
nes. No tengo más que decir.

El Sr. ROJO ARIAS: Declaro que estoy comple-
tamente satisfecho con las palabras del Sr. Maluquer,
y que soy yo, sin duda, quien no entendió bien los
conceptos de S. S.

El Sr. SECRETARIO (Torre y Villanueva): ¿Se
toma en consideración la enmienda del Sr. Maluquer?

El Senado acordó en sentido negativo.

El mismo Sr. Secretario, dio segunda lectura de
otra enmienda al mismo artículo del Sr. Hernandez
Iglesias, que decía así:

«El Senador que suscribe pide al Senado se sirva
acordar que se excluyan de las causas de que conocerá
el tribunal del Jurado y que enumera el art. 4.° del
dictámen de la Comisión, las formadas por los delitos
de rebelión y por los de sedición.»

El Sr. SECRETARIO (Torre y Villanueva): La
Comisión manifestará el admite ó no esta enmienda.

El Sr. ALDECOA: La Comisión no puede aceptar
la enmienda del Sr. Hernandez Iglesias.

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Hernandez Iglesias
tiene la palabra para apoyar su enmienda.

El Sr. HERNANDEZ IGLESIAS: Sin prevencio-
nes sistemáticas contra el Jurado y desligado de todo
compromiso de partido y de escuela, voy á procurar,
Sres Senadores, ciñéndome, no solo al espíritu sino
sino al de la letra de la enmienda, voy á procurar, repito,
defenderla en los más breves términos posibles, te-
niendo sobre todo en cuenta lo largos que van siendo
estos debates y el estado de la Cámara.

Ya lo había ido: la enmienda que se discute
propone que se excluyan de la competencia del Ju-
rado los delitos de rebelión y sedición; y entiendo que
tal propuesta será hecha abonada, porque de no acceder
á ella la Comisión, acusará falta de criterio y de ló-
gica en su conducta.

Son, pues, en mi entender, dos los defectos que
acusa el dictámen que discutimos al incluir en la
competencia del Jurado los delitos de rebelión y se-
dición.

No es fácil, estudiando el proyecto que se discute
y determinada y concretamente el art. 4.° á que se
refiere mi enmienda, determinar cuál ha sido el cris-
terio de la Comisión.

He procurado buscar armonía entre los delitos
atribuidos á la competencia del Jurado y los exclu-
dos de ella y reservados á la jurisdicción de los tri-
bunales de derecho, y declaro que, quizás por mi falta
de competencia, no encuentro armonía de ningún gé-
nero. Ni en la enormidad de los delitos, ni en la gra-
vedad de las penas, ni en la mayor ó menor frecuen-
cia de los delitos, ni en la índole misma de ellos más
ó menos relacionada con la pública opinión y con el
sentimiento público, ni en la sencillez de sus concep-
tos, ni en la facilidad de su comprobación, ni en la
necesidad más ó menos determinada por el tiempo en
que vivimos y por el país en que habitamos, de re-
primir con relativa severidad, paréceme que concur-
ren con lógica severa las inclusiones ni las exclu-
siones acordadas. Es el del dictámen, en mi entender,
un criterio puramente eclectic, que domina espe-
cialmente en la redacción del art. 4.° y que en él se
ha dejado sentir más que en ningún otro. Así lo han
dicho, con más autoridad que yo, los Sres. Senadores
que han hablado del mismo artículo esta tarde, ex-
pliándose con vivos colores cómo han dado tan fu-
nestos resultados las influencias, las exigencias, las
conveniencias acomodaticias, las circunstancias por
que sirvamos, las condiciones del partido que trae
el proyecto á la Cámara y hasta el estudio de las opo-
siciones.

De una y otra cosa con bastante autoridad y fre-
cuencia se ha hecho mención esta tarde al discutirse
el artículo á que me refiero.

Pero no por esto puedo prescindir de estudiar es-
pecialmente los delitos de rebelión y de sedición que
la Comisión encomienda á la competencia del Jurado,
y que yo quiero reservar á la de los tribunales de de-
recho; ni puedo menos de apreciarlos por sus con-
diciones especiales y en relación con los demás delitos
que se incluyen ó excluyen de la competencia del Jurado.

Los delitos de rebelión y sedición, Sres. Senado-
dores, tienen la singularidad de dividir de una manera
muy marcada la opinión pública. Esta es una verdad
inmejorable e indiscutible. Asumen los ánimos de
manera excepcional, los apasionan tanto como des-
gualdad muy digna de ser notada. Hay personas,
grupos sociales, pueblos y hasta provincias, en que
estos delitos cuentan con prevención hostil, acaso
exagerada y como sistemática; y, por el contrario,
y hay provincias, pueblos, grupos é individuos en que
estos delitos tienen á su favor un apasionamiento
más ó menos exagerado y sistemático. Lo que para unos
es idólo, para otros es motivo de maldición y de repro-
bación. La sociedad está dividida, puede decirse,
en estas materias en dos bandos diametralmente
opuestos; no hay término medio ni prudente. Y en
nuestro país, donde precisamente el provincialismo
tiene á un nivel y marcas tan salientes, es más nota-
ble la diferencia.

Suponiendo por un momento una rebelión carlista,
y no me costará mucho probar cuán cierto es que
en nuestras provincias del Norte, por regla general,
conocerían esos de simpatía. Por el contrario, quíz
en nuestras provincias andaluzas ó del centro de Cas-
tilla hallaría reprobación acaso exagerada. Y lo que
digo de una rebelión carlista pudiera decirlo, pero
refiriéndome á provincias españolas de distinta posi-
ción geográfica, de una insurrección republicana.

De suerte, que respecto á los delitos de rebelión y sedi-
cion, la opinión no sólo se divide sino que se apasiona
de una manera peligrosa ó inconveniente para el descu-
brimiento de la verdad y para la recta aplicación de
la justicia.

Este, como comprenderán los Sres. Senadores, es
grave mal aceptando vuestra doctrina de que el Ju-
rado tiene á través otras misiones, la de importar en
la administración de la justicia el concepto de la opi-
nión pública. Si la opinión pública está evidentemente
extraviada cuando de esta clase de delitos se trata, en
lugar de ser ventaja será un gravísimo peligro llamarla á conocer y resolvet en tan grave materia.

Esto bajo el punto de vista técnico. Pero bajo el
punto de vista práctico, habría de concederme que surgirían dificultades de no menor cuantía. Se trata de delitos de colectividad, y en esta clase de delitos la aplicación del Jurado ofrece dificultades materiales con arreglo al proyecto de ley por cuya aprobación abogais. Por mucho que limitemos la extensión de la rebelión y de la sedición, para que efectivamente estos delitos existan y merezcan tal denominación jurídica, es necesario que sean cometidos por colectividades.

No es necesario suponer que en varias provincias surjan simultáneamente la rebelión ó la sedición, aunque con frecuencia así acontece; limitada si quieris a una sola provincia, limita aún más, limitada a un solo pueblo; y habiendo de organizar el Jurado con vecinos del partido judicial en que ha de funcionar ó de la municipalidad en que está enclavado el partido si son varios los que en una misma municipalidad existen, no exagero si llamo vuestra atención sobre la dificultad ó imposibilidad acaso, que en la mayor parte de los casos habrá para que se constituya el Jurado, el tribunal que quieras que juzgue esta clase de delitos.

Y es lo más lamentable que contra aquella gravedad y esta dificultad no hay previsiones en el proyecto, que pudiéramos llamar normales y ordinarias y no alarmantes, porque no hay más previsiones que la alarma, extraordinaria y anormal de suspensión de la aplicación de la ley. Parécenos que debemos procurar facilitar la gobernación del país por medios ordenados para que las autoridades funcionen sin necesidad de acudir al medio extremo de suspender las leyes comunes.

Pero si debemos de analizar los delitos de que trata, apreciando en su propia índole y valorando las dificultades materiales que pueden surgir, que surgirán, sin duda, de encomendar su represión al Jurado, se desciende á la comparación de estos delitos con los demás que pertenecen, por decirlo así, a la misma familia y en el mismo título del Código penal están comprendidos, para ir despus á su comparación con otros que se incluyen ó excluyen de la competencia del Jurado, fácilmente se pondrá más de relieve la procedencia de mi enmienda.

Todos sabes que los delitos de rebelión y sedición son delitos contra el orden público, y en el título que lleva este epígrafe están incluidos y á su cabeza figuran. Son también delitos contra el orden público, los atentados contra la autoridad y sus agentes, los de resistencia, desobediencia y desacato, los insultos, injurias y amenazas contra la autoridad y sus agentes y contra los funcionarios públicos y los agentes de los ordenanzas públicos. Y pregunto con toda sinceridad: ¿con qué título ó por qué concepto, se justifica que, por ejemplo, el atentado que tiene los mismos caracteres que la rebelión y la sedición, su misma naturaleza, sin otra diferencia que la del autor, porque el atentado puede cometerse por una sola persona y la rebelión y la sedición implican la necesidad de un alzamiento público, cómo se justifica, repito, su diversa competencia, cuando precisamente la forma de cometerse de los delitos de rebelión y sedición es la que más abona su exclusión de la competencia del Jurado? ¿Por qué no excluimos ígualmente de tal competencia el delito de atentado? ¿Por qué no excluimos igualmente los delitos de ordenanzas públicas, que no son más que el rebelión y sedición atenuada?

Decía el Sr. Aldecoa, en el último de sus discursos contestando á otro Sr. Senador que de análoga materia se ha ocupado: «no es la gravedad del delito y la consecuente y correlativa mayor gravedad de la pena que nos ha determinado y decidido á acordar exclusiones ó inclusiones en la enumeración de los delitos que á la competencia del Jurado encomendamos.» Y si no es la gravedad del delito, ¿cuál es la diferencia que aquí media? Yo no encuentro otra. Pero añadía S. S.: «son las figuras de los delitos las que deciden nuestras inclusiones ó exclusiones» y parecemos que lo lógico de esta teoría debiera llevarla á declarar de la competencia ó de la incompetencia del Jurado todos los delitos contra el orden público, pero no á hacer una distinción entre unos y otros delitos, cuando todos tienen la misma forma, concepto y carácter.

Pero pueden hacerse otras comparaciones que acusan aún mayor falta de lógica por parte de la Comisión. Excluye esta de la competencia del Jurado, los delitos de lesa majestad que están caracterizados por una ofensa personal al Rey, á su consorte, á su sucesor ó á la Regencia. Altas consideraciones aban nan la exclusión de esta clase de delitos, y de ella ha hecho alguna indicación esta tarde, hábilmente como de costumbre, el digno individuo de la Comisión, que lleva todo el peso de la misma, el Sr. Aldecoa. Pero yo pregunto á la Comisión, y pues que tan dignamente la representa, al Sr. Aldecoa: ¿no es cierto que el delito de rebelión implica el mismo fin y el mismo propósito que el delito de lesa majestad, sin otra diferencia que la alarmante y peligrosa para la cuestión que debatimos, de que la ofensa al Rey ó á la Regencia en la rebelión, se hace por una colectividad en lugar de hacerse por una individualidad, con los graves consiguientes perjuicios que antes he citado? El art. 243, que define el delito de rebelión, al enumerar los casos en que se comete, cita en el primero los supuestos de destronar al Rey, deporner al Re gente ó privarle de su libertad personal ó obligarle á ejecutar acto contrario á su voluntad.

La diferencia, por consiguiente, consiste tan solo en que los delitos de rebelión y sedición se cometen por medio de un alzamiento público y en abierta hostilidad con el Gobierno, y los delitos de lesa majestad se cometen por una persona sola ó por más, siempre que su número y manera de obrar no implique alzamiento público y abierta hostilidad contra el Gobierno. Y yo pregunto con toda sinceridad: ¿no es verdad que si una sola persona hiciese ofensa personal al Monarca, á su consorte, á su sucesor ó á la Regencia, alarmaría más, irritaría más la pública opinión, y por consiguiente, esa que nosotros lleváis á la administración de justicia por medio del Jurado, que sí aquello se verificara por medio de un alzamiento popular, que por ser alzamiento y ser popular tendría sus simpatías, tendría sus afectos y tendría muchas voluntades y muchos corazones que la ayudaran y le auxiliaran? De forma y manera que en materiales el fundamento precedente de que sí fuera posible que un desalmado cometiera en la Cámara Régia una ofensa á la persona de la Ilustre Señora que desempeña la Regencia, esto que irritaría á todos sin distinción de partidos, no se encomiende al Jurado; pero sí esa persona cometiera dicha ofensa amparada por un levantamiento popular, que por el mero hecho de ser popular tiene tras de sí la opinión ó las simpatías de
muchos, esto se debe encomendar al Jurado. Pensad en que probablemente tendría necesidad de encomendarlo á los mismos que ayudaron al movimiento, si no de hecho, con su voluntad ó con su simpatía. Y lo que digo del delito de rebelión, lo digo del de sedición, pues que los fines y los efectos son análogos.

De forma, señores, que cuando el acto es puramente personal, y por consecuencia notoriamente antipático, le excluye del Jurado, teneis miedo de que el Jurado os falte y no decrete la conveniente represión; pero cuando el delito tiene cierto color, cierto título y cierto como sabor político, y por consiguiente, cuenta con simpatías, y su represión ofrece muchas más dificultades, especialmente por el procedimiento de un tribunal popular, entonces quereis que ese tribunal popular lo definan y lo castiguen.

 Esto no solo tiene graviísimos inconvenientes y acusa una lamentable falta de lógica, sino otra falta mucho más digna de consideración y estima, es la de falsar por completo el lúdable propósito que habéis enunciado al excluir de la competencia del Jurado los delitos de lesa majestad. Desprestigia vuestra obra en absoluto, y acusaís no haber teuido valor para aplicar la misma doctrina á delitos análogos, cuando son cometidos por medio de alzamientos populares. Teneis que de esa manera os hagais más enemigos de la misma clase de gentes, y cuando se trata de resorbes de gobierno, como en este caso indudablemente se trata, parece que no se deben tener estos acobardamientos, tanto más cuanto que la lógica y la ciencia los condenan.

También habéis excluido de la competencia del Jurado los delitos electorales. Esta misma tarde el Sr. Aldecoa, con una ingenuidad honestísima para él, justificaba aquella exclusión: esta misma tarde el señor Aldecoa, decía con entusiasmo: «entendido que en materia electoral hay una gran perversion en la opinión pública de nuestro país, y lo lógico es que no permitámos que esa clase de delitos sea apreciada por la pública pervertida opinión: esperado que esa opinión se rectifique y que no haya el error de entender que todo lo que en materia electoral se haga, siguiendo la violación de la ley, es cosa laudable, y entonces trae a la competencia del Jurado los delitos electorales, como trae a los delitos de los cuales no creemos que pueda el Jurado ser hoy conveniente.»

A pesar de esto, no excluid de la competencia del Jurado la rebelión definida por el art. 243 del Código penal, en cuyo núm. 2.° se dice: «que se comete por impedir la celebración de las elecciones para Diputados á Cortes ó Senadores, en todo el Reino.»

No excluid de la competencia del Jurado la sedición, definida en el art. 250 del mismo Código, en cuyo núm. 1.° dice, cométase por impedir la libre celebración de las elecciones populares, en alguna provincia, circunscripción ó distrito electoral. ¿Es eso lógico?

De suerte que si un desgraciado mortal se atreve á cometer una violación de las disposiciones que rigen en materia electoral, dudais de que haya un Jurado que los condene, creéis que es muy de temer que en el extravío en que se encuentra la opinión pública sobre elecciones, haya jurados bastantes para condenarle; y cuando este mismo delito se comete en aso- nada pública, congregados todos los vecinos de un pueblo, todos los que pueden ser jurados, los únicos que tienen aptitud para ser jurados, queréis que ellos mismos se ajusten y condenen. ¿Es esto lógico, señores Senadores? No solo resulta en ello la falta de lógica, sino que resulta otra cosa aun más lamentable, y es, que si ciertamente son de apreciar las consideraciones por que excluid de la competencia del Jurado los delitos electorales, hacéis la condenación de vuestros principios, de vuestras doctrinas y de vuestro proyecto, no excluyendo también los delitos de rebelión y sedición, que electorales son en ciertos casos, puesto que se cometen impidiendo las elecciones no ya en todo el país, sino en un solo distrito electoral. Notad de otra parte, Sres. Senadores, la alarmante frecuencia con que los delitos de rebelión y sedición se han venido cometiendo en nuestro país.

Hoy, por fortuna, respiramos un poco libremente; pero hasta eso acusa lo familiarizados que estamos con esa clase de delitos. Aun parece como que resuenan los ecos de los últimos rebeldones, y que se han repetido dentro del mismo año, decíamos que el cielo se serena y el sol se despeja; ¡Ah! Yo así lo deseó, yo así lo espero; pero al ver la facilidad con que damos importancia á este breve trascurso de tiempo pasado en paz, acabamos de reconocer que estamos enfermos de aquel mal, que estamos bastante familiarizados con los delitos de rebelión y sedición.

Tan cierto es esto y tanto ha dominado la opinión de nuestros legisladores, que para tales delitos se creyó indispensable emplear medios de represión excepcionales y procedimientos excepcionales también.

Por ventura para la represión y castigo de los demás delitos que comprendeis en la competencia del Jurado hay el largo proceso de jurados publico que existen para la represión de estos delitos que han venido siendo como enfermedad endémica de nuestro país y vosotros rompéis por completo con estos tradiciones nobilitamos de nuestro Poder Legislativo, y encomendáis de hoy más la represión de esta clase de delitos al tribunal que, siquiera tenga condiciones plausibles bajo otros conceptos, bajo vuestro mismo principal punto de vista ofrece el gravísimo mal para este caso de juzgar por corrientes de pública opinión, y las corrientes de pública opinión pensadas con seriedad y calma cuándo serán cuando el país, la provincia ó el municipio estén siendo presa de una rebelión ó de una sedición.

Yo entiendo que estas cuestiones del Jurado no deben apasionarse con apreciaciones meramente políticas y vosotros recordareis que yo he procurado combatir la defensa que bajo el punto de vista puramente político quería hacerse. Ciertamente, Sres. Senadores, que tratándose de los delitos de rebelión y sedición, habida cuenta con la definición que de ellos hace nuestro Código penal, no puede preseñirse en absoluto del concepto político y del carácter grandemente social que entrañan. Penseis que vivimos en un país en que hay instituciones inamovibles á responsables, y someter al Jurado algo que á esas instituciones afecte, es negar toda clase de buenos principios, no sólo políticos, sino jurídicos.

Defendéis la intervención del Jurado como medio, en vuestro entender, pacífico y ordenado de traer á los ciudadanos á la administración de justicia y de llevar á ella las corrientes de la opinión, pudiendo llegar un día en que hasta se rompan, como decía gráficamente el ilustrado Sr. Aldecoa, los moldes de nuestra legislación penal. Esto que pretendéis, bajo
vuestra punto de vista, quizás en un terreno ab- 
tracto y científico, es inaudible; mas tened cuidado de 
que no llegue a suceder tanto con aquello que todos 
queremos que debe ser inmutable, inamovible e ir-
responsible; porque aquí, donde la Monarquía está den-
tro del Poder legislativo por medio del veto, y á la 
cabeza del Poder ejecutivo, y por consiguiente, del 
Poder judicial; en el país en que esto es constitucional, 
elevar las corrientes de la opinión hasta su 
alza, es exponer tan elevada institución á la acción 
demócrata de los apasionamientos y dejarla depen-
der exclusivamente del movimiento más o menos or-
denado, más o menos recto de aquella opinión pública.

Yo quisié, os lo confieso, no tener absolutamente 
ningun antecedente político; yo quisié carerecar tam-
bién de la prevención que contra mí habrá quizás, al 
menos desde esos bancos (Sicandado al ministerial 
at al de la Comisión), porque antes he tenido el honor 
he cumplido el deber de combatir el Jurado bajo al-
gun otro punto de vista, para que hiciéras justi-
cia á la sinceridad de mi opinión y comprensión 
una cosa innegable; y es, que con perturbación de 
la buena doctrina política dentro de las instituciones 
constitucionales que nos rigen, y con perversion de 
las instituciones jurídicas dentro de las que forman 
la institución del Jurado y su desarrollo, encumen-
dais al Jurado ajúciar sobre una cosa que, política y 
jurídicamente, los que os escutáis abj, como los que 
os sentamos aquí, tenemos que conceptual inamo-
vible. Cesa, pues, en esta materia toda-causa de abo-
ño á la aplicación del Jurado, y abris la puerta á un 
pequeno inmenso de que yo quisié librár á mi país. 
He dicho.

El Sr. ALDECOA (de la Comisión): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: Tiene V. S.
El Sr. ALDECOA: Señores Senadores, el notable 
discursm do Sr. Hernandez Iglesias, que acabais de 
óir, exigiría el intento siliciente de una contestación 
acuclada; pero el estado de la Cámara parecemos que 
me impone el deber de decirme de una manera muy 
concreta á defender el articulo en la parte que ha 
sido objeto de la enmienda de S. S.

Pero en el discurso del Sr. Hernandez Iglesias, que 
en la Comisión había falta de criterio, falta de siste-
ma, falta de lógica. Yo no quiero repetir ya lo que 
manifestó no ha muchos momentos, contestando al 
discursm do Sr. Maluquer, porque es probable que se 
presente nueva ocasión de demostrar la lógica, el cri-
terio y el sistema con que la Comisión ha procedido 
at aceptar la clasiificación de delitos tal como se enu-
mera en el art. 4° que discutimos.

Yo pudiera, Sres. Senadores, repetir esta tarde las 
mismas palabras con que pronuncié ayer mi discurso 
de contestacion al Sr. Conde de Canga-Ariguelles, re-
ferente al espirit de desconfianza que informa algu-
ñas enmiendas, pues sobre esto encuentro que hay 
algunos puntos de contacto entre la enmienda del se-
nor Hernandez Iglesias y la del Sr. Conde de Canga-
Arguelles. Ayer fui el aspecto religioso el que atra-
ía la atencion del Sr. Conde de Canga-Ariguelles; hoy es 
el aspecto político el que ha servido de fundamentm 
al Sr. Hernandez Iglesias, para pedir que excluyam-
os de la competencia del tribunal del Jurado los 
delitos de rebeldon y sedicion.

Pues bien, Sres. Senadores; precisamente en este 
aspecto esencialmente político que tienen los delitos 
de rebeldon y sedicion, está la razón principal que han 
tenido el Gobierno y la Comisión para incluirlos entre 
delitos de que debe conocer el tribunal del Jurado. Porque no es posible olvidar que en sus comien-
zos la institución del Jurado (y me referir al Jurado 
moderno), obedeció más principalmente a la necesi-
dad de satisfacer una exigencia política, necesidad 
sentida en las relaciones entre gobernantes y gober-
nados y en los conflictos que por consecuencia de es-
tas relaciones solían aparecer en una u otra forma.

Ya sé yo que hoy las corrientes no van por ese 
camino, que hoy las legislaciones más adelantadas en 
materia de Jurado le examinan y le discuten con un 
señor más jurídico y científico que político; ya sé 
yo que lo mismo en las discusiones del Parlamento, 
que en las Academias, que en los libros, donde ríen 
sus batallas los adalides de uno y de otro sistema, es-
cogen el terreno de la ciencia y del derecho y pren-
cienden ó relegan ó un segundo término el arquitecto 
terreno de la política; lo cual lo considero un inmen-
so bien para la institución y una garantía para su 
vida en lo porvenir. Pero aun cuando esto sea así, no 
¡es posible prescindir de esa nota política que indudam-
blemente tiene la institución del Jurado, como la ga-
rantía más eficaz de todos los derechos políticos y de 
la libertad bien entendida en todas sus manifesta-
ciones.

Dice el ilustre Carrara, que la máxima aquél de 
de que la ley penal ha sido hecha para seguridad de los 
gobiernos más bien que para seguridad de los ciudad-
nanos, es una máxima bárbara (lo dice Carrara, no 
yo), que si pudiera prosperar en los nuestros de Calígula 
y de Arcadio, no es sostenible dentro de la cultura 
moderna; y yo me permito añadir, que entiendo que 
la seguridad mayor de los Gobiernos consiste precis-
samente en afianzar y garantizar la seguridad de los 
cuidanos, y me parece, Sres. Senadores, que esta 
tarde el Sr. Hernandez Iglesias, al defender su enmien-
da, se ha preocupado mucho más de esta necesidad de 
existencia y seguridad de los Gobiernos, que de la 
necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. 
No desconozco por esto lo que antes he manifestado, 
y es que la cuestión del Jurado, por regla general, 
hoy se discute proferentemente en el terreno de la 
ciencia y en el terreno del derecho, y que la misma 
enmienda del Sr. Hernandez Iglesias se puede dis-
ter la discusión profundamente bajo un punto de vista so-
cial más que político; pero sin embargo, no podemos 
prestarnos de esa nota que hace tampoco uno de los platinillos de la balanza, porque si interesa 
muchó y muy mucho la seguridad de los Gobiernos, 
repito que no interesa menos la seguridad y garantía 
de los derechos de los ciudadanos.

¿Y hay alguna razón especial, Sres. Senadores, 
que aconseje la exclusión de los delitos de rebelión y 
sedición del cuadro de delitos que el art. 4° enumera 
como de la competencia del tribunal del Jurado? En-
tiendo que no solamente no hay ninguna, sino que 
son de los delitos que más justificadamente deben de 
someterse á la competencia de este tribunal; en pri-
mer lugar, por lo que ya he manifestado, porque son 
delitos políticos, y diferencia de esos otros delitos de 
desorden, atentados y desacatos, que aun enando 
tengan algunas notas comunes con los delitos de re-
belión y sedición, por la manera de realizarse, por el 
objetivo particular que se proponen sus autores, no re-
visten, no tienen los caracteres de delito político.

Y cuidado, señores, que al hablar de delitos polí-

ticos, yo no dejo de conocer que estos delitos son de los más graves y enormes, de los que mayor alarma producen, de los que más daño causan; pero por esta razón, creo que son de los que con menos inconveniente pueden someterse al juicio del tribunal del Jurado, por el interés inmenso que la sociedad tiene en castigar esta clase de delitos que tanto daño la producen, y porque supuesta esta primera condición, así será como los verdaderos y falsos de los tribunales resulten con la aureola y la garantía de la opinión pública, de que en otros casos pudieran carecer.

Acaso, Sres. Senadores, los que me oís, penséis y digáis para vuestros adentros, que yo desconozco de los tribunales de justicia. Nada más lejos de mi ánimo que semejante desconfianza; pero yo digo de los tribunales de justicia lo que se dice de la mujer, que es necesario no solo que sea buena, sino que lo parezca; y si en algunos casos pudiera dudarse con cierta aparición, nada más que con cierta aparición, de los tribunales de justicia, sería precisamente tratándose de estos delitos por el interés especial que en ellos tiene el Poder ejecutivo, del cual, hasta cierto punto, y de cierta manera depende el Poder judicial, (El señoř Hernandez Iglésias: Pido la palabra.) Y así es que a mí me hace mucha fuerza una observación muy prudente de un ilustre escritor italiano, que al hablar de estos delitos, afirma y asienta que allí donde hay Jurado, no deben encomendarse los delitos políticos á los tribunales de justicia, para evitar que las iras populares se vuelvan contra ellos, y porque por la fuerza de las circunstancias los jueces y magistrados activos ó pasivos se ven envueltos en la política y en el torbellino de sus pasiones, y que aun cuando así no suceda, si más le parece, el interés es importante tanto como la misma realidad, la consideración de que los tribunales de justicia tengan seguridad ín-dependencia.

Pero decía el Sr. Hernandez Iglésias: ¿y vais a encomendar los delitos de rebelión y sedición á un tribunal de jurados, siendo así que es evidente de toda evidencia el apasionamiento que esta clase de hechos revela, ya en un sentido, ya en otro, de modo que sí hay un levantamiento, una rebelión carlista en las provincias del Norte, es posible que la opinión esté de parte de los sediciosos y rebeldes, mientras que, por el contrario, en Castilla ó Andalucía serían castigados severamente? El argumento de S. S. tiene una gran fuerza, más aparente que real, en mi concepto, porque yo le pregunto: ¿es que aún en ese supuesto, no hay recurso dentro de la ley? Demasiado lo sabe el Sr. Hernandez Iglésias, que se ha adelantado á indicarlo, si bien S. S. desconocía que no hubiese necesidad de echar mano de este recurso sino en caso extraordinario. Pero yo digo más á S. S., y es, que esta pintura que ha hecho del estado social de nuestro país con relación á los delitos que aquí discutimos, no es una pintura completamente exacta, y no es lo mismo la posibilidad de que un hecho suceda, que la probabilidad de que realmente acontecería. Y al entrar en este punto del discurso de S. S., no puedo por mí mismo de echar una ojeda sobre el estado de nuestro país; y me parece que es inseguro el estado de tranquilidad moral y material que disfrutamos, y que se revela evidentemente en esa misma libertad y serenidad con que se discuten y aúman todo suerte de ideales, como mismo en la prensa y en la tribuna, en que en círculos políticos, sin que por esto se

conmuevan los cimientos sobre que se asienta nuestra Constitución política; y esto lo que significa es lo bien hallado que el país se encuentra con la paz y el orden, que son las condiciones con que pueden desarrollarse toda clase de iniciativas, y con que puede mediar y pensar se desapasionadamente, siendo también las mayores garantías de éxito y de bondad de toda suerte de leyes, lo mismo en el orden económico, que en el orden político, que en el orden moral.

Siendo esto así, ¿cree S. S. que habría en nuestro país, por regla general, salvo raras excepciones, ciudadanos que si mañana fueran llamados á juzgar estos casos de rebelión y sedición, no los castigarían severamente para evitar el que se intentase arrebatabon estos dones preciosos de la paz y del orden? Pues es menester ser muy desmemorado para no recordar cómo no ha mucho murió asfixiada al nacer, una desventurada rebelión por faltarle el oxígeno de la opinión pública, y yo creo que esta misma opinión pública, si hubiese sido llamada á juzgar á estos rebeldes, los habría castigado tan severamente como cualquier tribunal de derecho. Yo entiendo que si no puede negarse á un ciudadano, por humilde que sea su condición, interés en castigar los atentados contra las personas y contra la propiedad, siquiera no sea más que movido y estimulado por un sentimiento orgulloso, porque todos tenemos derechos y propiedades en mayor ó menor extensión que defender, tampoco se les puede negar interés en asegurar estas condiciones de paz y de orden, dentro de las cuales es como se desarrollará libremente la personalidad humana. Menester fuerza, Sres. Senadores, y voy á decir muy pocas palabras para concluir, que la opinión pública estuviese lúcidamente perturbada, y que por consecuencia de esta perturbación pudiera tomarse fundadamente la indefensión de la sociedad y la impunidad de estos delitos sí se sometieran al Jurado, para que nosotros hiciéramos esta resta; pero desgraciados de nosotros y desgraciada de la sociedad sí esto fuera cierto, que no me parece que sería muy posible librarnos de los embates de las pasiones democráticas, si por todo apoyo contásemos con el de una sociedad que fuese excep-citiva, despreciable e indiferente.

Y como no me parece que hay motivo ninguno y mucho menos en los momentos actuales, para tener esta idea pesimista de nuestro estado social, es por lo que creo que no debe admitirse la enmienda del Sr. Hernandez Iglésias.

Para concluir, si á S. S. le parece demasiado optimista este punto de vista de la Comisión, no tengo inconveniente en colocarme por un momento en el terreno pesimista de S. S., suponiendo que es posible que por un concurso de circunstancias resulte que tan perturbada se encuentre la opinión que sea peligrosamente encomendar al tribunal del Jurado el conocimiento de esta clase de delitos; pero no hay recurso dentro de la ley? Ya lo ha reconocido el mismo señor Hernandez Iglésias: hay el recurso de suspender en este caso extremo el funcionamiento de la institución total ó parcialmente; y además no olvide S. S. que por regla general los delitos de rebelión y sedición revisten el carácter militar, y en este caso no será el Jurado, sino los tribunales militares quienes los juzguen.

El Sr. HERNANDEZ IGLESIAS: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S.
El Sr. HERNANDEZ IGLESIAS: Creo que es cul-
pa de los que combatimos el proyecto de ley, no del Sr. Aldoeco, colocarse en una situación extremadamente negra que le obliga a exagerar sus argumentos, porque le combatimos sin tregua, aunque de otra parte él es tan generoso que siempre presenta su cuerpo delante de la Comisión y del Gobierno sin dudarle prendas. Solo así, Sres. Senadores, se explica que un entusiasmo tan claro como el del Sr. Aldoeco, diga que los delitos de rebelión y sedición deben ser de la competencia del Jurado precisamente por su índole política. El señor Aldoeco cree que es conveniente exceptuar de la competencia del Jurado los delitos electorales, los de leal magisterio, etc., y sin embargo, se ve en la dolorosa necesidad de rectificar sus ideas y decir: «bien sé yo que voy por mal camino, que no es esa la manera cómo se defiende en otros países la institución del Jurado, pero...» Y no sé por qué pero viene a concluir que los delitos de rebelión y sedición tienen las condiciones más apropiadas para ser de la competencia del Jurado; de modo y manera, que si hubiese alguna excepción justificada, sería la de estos delitos no sean sustraidos de dicha competencia.

El Sr. Aldoeco dice: «¿pues es tan grave esto que manda uno ú otro Gobierno? ¿Son los Gobiernos inviolables? Porque surja una rebelión o sedición, no se propusiera echar abajo, como vulgarmente se dice, á un Gobierno, ¿se hundiría el mundo?» Es verdad. No es muy bueno que nos vayamos familiarizando con la idea de que las rebeliones y sediciones son cosa de poco más o menos; pero ¿creo el Sr. Aldoeco que el único objeto de estos delitos es el de variar el Ministerio existente? A mí me parece que el Gobierno de un Monarca debe pensar que se trata de encomendar al Jurado el conocimiento de los actos dirigidos á destruir al Rey, á deponer á la Regencia del Reino, á privarle de su libertad personal ó á obligarle á ejecutar hechos contrarios á su voluntad, y estos fines están determinados en el n° 1.° del artículo del Código penal que define los delitos de rebelión; y quiere la Comisión, quiere el Gobierno de la Regencia, que la opinión pública tenga fácil acceso para decidir si se ha cometido ó no el delito de violentar la voluntad del Monarca, y sea la que decida sí hay ó no culpabilidad en actos de esta índole?

Yo entiendo que eso pudiera decirse en un país en que la forma de gobierno estuviera exclusivamente al amparo de la opinión, en que no hay poderes irresponsables e inviolables; pero decir esto en un país monárquico, detrás del representante del Gobierno de S.M., me parece grandemente peligroso, porque, repito, las mismas circunstancias y aun mayores, que abonan por motivos esencialmente políticos, sustraer a la competencia del Jurado los delitos de leal magisterio, abonan sustraerles los de rebelión y sedición que tienen el mismo objeto, y además el concepto simpático del aura popular, y el peligroso concepto de que es necesario para que sean delitos de rebelión ó sedición que se han de cometer por muchas personas dificultando, si no imposibilitando, la constitución del tribunal del Jurado.

Sedición es en un pueblo un motín para evitar las elecciones municipales, y si el pueblo es pequeño de 12, 14 ó 20 vecinos; como para que haya sedición se necesita que se reúna tanto número, ¿quién los va á juzgar? Estas son dificultades prácticas. Pero lo esencial aquí es que los poderes irresponsables, garantidos por la Constitución, y calificados de tales por la misma inmutabilidad, si los delitos de rebelión y sedición queden encaminados á la competencia del Jurado, y á la apreciación de ese que se llama común movimiento de la opinión, dejan de ser poderes inviolables. ¿Qué prestigio tendrá un Ministerio del Rey ante el veredicto de un Jurado que después de una rebelión ó de una sedición consumada declare que no hay culpabilidad en sus autores?

Ya sé, y lo decía el Sr. Aldoeco, que puede suspenderse la aplicación de la ley. Pero ¿es así como deben gobernarse los países que por entrar en vías de madurez están llamados á gobernarse de manera sábia y digna? ¿Es posible que no vivamos sino al amparo de recursos anormales y extraordinarios? No debemos procurar la defensa constante, permanente y normal de aquello que nosotros creemos que permanece y normalmente debe funcionar?

Yo, que no participo de apasionamientos de partido, he visto en la dolorosa necesidad de entrar en esta corriente de la impugnación política; porque se trata de delitos que, como ha dicho el Sr. Aldoeco, se consideran esencialmente políticos. Pero la misión principal de esta mi defensa debe encaminarse al Gobierno de S.M., dignamente representado en el banco azul por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia. Las opiniones de la Comisión en este momento, ó al menos las razones que en esta ocasión la Comisión da, son peligrosas para las instituciones: hay un evidente contraargumento entre la necesidad que aquí tenemos todos los partidos moudiques de defender las instituciones inviolables e irresponsables, y el criterio de la Comisión, que abona la competencia del Jurado, precisamente porque abre las puertas á corrientes de opinión que, lenta ó apresuradamente, han de subir á la administración de justicia y romper los actuales moldes del derecho penal. Sí, se rompen en el delito de rebelión; violar la persona del Monarca, cohibirle, obligarle á hacer lo que no quiera, y hasta disolver los Cuerpos Colegiados, no será delito. En este camino, si se extrema así la defensa, yo, que procuro no extremar la oposición, diré lealmente que nos ha faltado la calma y que estamos combinando cosas y tomando acuerdos de que otros días nos hemos de lamentar con lágrimas en los ojos. He dicho.

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Alonso Martínez): Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S.

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Alonso Martínez): Decía el Sr. Hernandez Iglesias, no ha mucho, dirigiéndose á mí amigo el Sr. Aldoeco, que exagera sus argumentos; y esto sí que le es perfectamente aplicable á S. S., porque los ha extremado hasta el punto de que establecía una hipótesis poco menos que imposible.

Su señoría supone que por este proyecto queda completamente desamparada la autoridad Real. Pues por el contrario, debía decir á S. S. que en este grave pecado ha incidió ya el Senado, porque en el proyecto anterior, cuando discutió el Jurado, dejó figurando los delitos de rebelión y sedición entre los que se declaran como de la competencia del Jurado. [El Sr. Hernandez Iglesias: Y sin discusión por desgracia, Sr. Ministro.] Bien, pero voy á demostrar que el Senado tuvo razón, y que S. S. es el que exagera. [El Sr. Hernandez Iglesias: No lo sabemos, porque no discutimos.] Su señoría exagera la argumentación. El Go-
bienmiente declara que á su juicio habrá resorciones de soberanía en la legislación actual, supuesta ya la aprobación y promulgación del proyecto de ley sobre el Jurado, que habrá, digo, resorciones sobrados para amparar las instituciones y defender el orden público contra todo género de rebeliones. Porque es menester no olvidar una cosa: este proyecto de ley no altera en poco ni en mucho la jurisdicción militar, la competencia de los tribunales militares en los casos que establecen las leyes. Este es un proyecto que distribuye los delitos, objeto de la jurisdicción ordinaria, entre los tribunales de derecho y el tribunal del Jurado; pero no destruye, ni de cerca, ni de lejos, el límite que separa la jurisdicción de los tribunales militares de la jurisdicción de los tribunales ordinarios; este proyecto no afecta, ni deroga, ni modifica la ley de orden público, y con la ley de orden público tiene de sobra un Gobierno, cualquiera que sea el mayor, que en política le distinga, para mantener la paz pública; pero mucho más contra el delito de rebelión.

¿Qué es delito de rebelión? «Son reos de rebelión, dice el Código, los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los objetos siguientes.» De manera que la condición esencial para que exista delito de rebelión, es el alzamiento público y en abierta hostilidad contra el Gobierno del país, y claro es que, desde este momento, no hay Gobierno que no contase poniendo en vigor la ley de orden público, y por tanto, desde entonces los rebelde quedan sometidos á la jurisdicción de los tribunales militares. Así es que no se citará una sola rebelión de nuestra historia contemporánea, desgraciadamente tan abundante en actos rebeldes, en que se hayan aplicado las leyes comunes por los tribunales ordinarios. Inmediatamente se ha aplicado, antes, la ley de 1821, y ahora la de 1870 sobre orden público, y ha empezado á funcionar la legislación militar. Pues sí á eso se agrega, señores, que todavía se da por esta ley al Gobierno, en uno de sus últimos artículos, la facultad de suspender el tribunal del Jurado parcialmente, es decir, para cierto género de delitos y en la provincia donde las circunstancias puedan aconsejar la suspensión, claro está que el Gobierno se ha reservado, los resorciones que se necesitan para defender la paz pública. No hay, pues, que echarmos en cara el abandono de la Persona de S. M., ó de la institución monárquica, ó del orden público.

El Sr. HERNÁNDEZ IGLESIAS: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. HERNÁNDEZ IGLESIAS: El Sr. Ministro de Gracia y Justicia tiene razón en todo lo que ha dicho; pero permítame que sobre ello le llame la atención, pues que es la defensa más cabal que hacerse pudiera de mi emulación. A fin de abonar la competencia del Jurado para conocer de los delitos de rebelión y sedición, solo ha podido invocar S. S. (doloroso es repetirlo) que nunca cuando haya rebelión ó sedición funcionará el Jurado. Y pregunta yo: PARA QUÉ ESTA VARIANT? ¡NO ES ESTO CONFIRMAR MI OPINION DE QUE LA SOCIEDAD NO PODRÁ VIVIR DE ESTA MANERA, Y QUE LOS ALTOS INTERESES, QUE EL GOBIERNO ESTÁ LLAMADO A DEFENDER, NO PODRÁN SER DEFENDIDOS DE ESTE MODO POR MEDIO DEL JURADO, PUESTO QUE S. S. INVOCÀ LOS RECURSOS ANORMALES, PELIGROSOS, APASONCIDOS, VIOLENTOS, INCONVENIENTES, PERJUDICALES, DE SUSPENDER LA LEY DEL JURADO Y DE CONFIRMA AL ORDEN MILITAR LA REPRESIÓN DE ESTA CLASE DE DELITOS? PUES S. S. MINISTRO, UNA DOLOROSA DISYUNTIVA SE PRESENTA: SI DEJAMOS FUNCIONAR LA LEY COMÚN, RESULTARÍA LA IMPUNIDAD; SI QUEREMOS EXCUSAR LA IMPUNIDAD, EL FUSILAMIENTO POR LA AUTORIDAD MILITAR. (El Sr. Presidente pronuncia palabras que no se oyen.) Sí, Sr. Presidente: el fusilamiento, porque en la ley de órden público sabe S. S. mejor que yo, qué proódigamente se impone la pena capital.

El Sr. PRESIDENTE: No hay tanta prohíbitividad como dice S. S., porque los tribunales militares tienen que aplicar el Código penal militar, en el cual no se señala tan proódimamente la pena de muerte.

El Sr. HERNÁNDEZ IGLESIAS: Yo no puedo discutir con el Sr. Presidente, y sobre todo en esta materia, y por lo tanto recojo con respeto todas sus advertencias.

Resortes habrá, como asegura el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, para defender los altos intereses que pueden poner en peligro los delitos de rebelión y sedición; pero no en la ley de Jurados que discutimos. Más hay otro peligro todavía, que pudiera de suceder: el peligro que antes cité: los argumentos que se alegan en defensa del Jurado por los más ilustrados sostenedores de él, son un peligro, señor Ministro, para esos alías intereses. Si el Jurado ha de responder á esos motivos sérios, levantados y de alta consideración, que por los apasionados en favor del Jurado se aducen, evidentemente esos motivos han de ir minando las instituciones; una de dos: ó han de prevenar los motivos de creación del Jurado, ó los intereses inamovibles, los intereses que estamos interesados en defender.

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Alfonso Martínez): Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S.

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Alfonso Martínez): Siento mucho que el Sr. Hernández Iglesias insista, contra las demostraciones evidentes que hacen de la lectura de los textos, en que el Gobierno deja desamparado á los Poderes irresponsables, consumiendo por cierto los delitos de lesa majestad con los de rebelión, cuando los primeros constituyen un ataque directo y personal, mientras los segundos suponen un alzamiento público y en abierta hostilidad contra el Gobierno de la Reina ó del Rey. Es menester, pues, que discutamos sinceramente. (El Sr. Hernández Iglesias: Contra la Personas de S. M.) Contra la persona de S. M. es el delito de lesa majestad, sin escudo, sin defensa, mientras que el delito de rebelión es el hecho de rebelarse contra el Gobierno para cualquiera de los objetos señalados... (El Sr. Hernández Iglesias: Privar de libertad personal al Monarca.) Bueno, pero en alzamiento público, en abierta hostilidad y rebelión contra el Gobierno, lo cual no sucede cuando se trata de los atentados contra la Persona del Rey.

Por lo demás, la argumentación de S. S. adolece del vicio de siempre. Dice S. S.: «el Jurado no sirve para castigar esos delitos; así es que el Ministro de Gracia y Justicia, para defenderse de los ataques que yo he dirigido al Gobierno, ha necesitado acudir á los remedios excepcionales, á la ley de órden público, á la jurisdicción militar, y en último caso, á la suspensión del Jurado.» Pues esa argumentación adolece de un defecto, porque en este lado de la Cámara nadie afirma que el Jurado no sirva para reprimir los
delitos de rebelión y sedición; esa es la preocupación de S. S. y de sus dignos correligionarios, pero no es ciertamente el juicio de la Comisión ni del Gobierno de S. M.

La Comisión, el Gobierno y la mayoría entienden que el tribunal del Jurado reprime efectivamente los delitos de rebelión y sedición; pero por lo mismo que se trata de una institución nueva, no ensayada todavía y ensayada en malas condiciones en España, por más que el ejemplo de todos los países del mundo civilizado demuestre que el Jurado sirve para reprimir esos delitos, porque no hay uno solo en que el Jurado se conozca de ellos; el Gobierno, la Comisión y la mayoría entienden que España no es un pueblo excepcional que no se paroza al resto de la humanidad...

[EJ Sr. Hernández Iglesias: En Irlanda se ha suspendido ahora el Jurado.] Su señoría cita a Irlanda, pero siempre resultará que en las 99 Naciones restantes los delitos de rebelión y sedición están encomendados al Jurado, sin que por eso se venga abajo el cielo.

A nuestros ojos el tribunal del Jurado reprime eficazmente los delitos de rebelión y sedición; y contra los temores de S. S. argumenta con la realidad. Primera realidad evidente: que apenas asoma un delito de rebelión, se publica la ley de órden público. Esto lo han hecho todos los Gobiernos, los conservadores y los liberales, y la ley del Jurado enmudecerá cuando esa otra ley, como enmudecen ahora en iguales circunstancias la ley orgánica de los tribunales ordinarios y la de enjuiciamiento criminal. ¿No es verdad que ahora encomienda la ley civil, la ley ordinaria, á los tribunales ordinarios el conocimiento de los delitos de rebelión? S. M. ha visto bien que en el momento en que asoma la cabeza la rebelión, los Gobiernos no sus delegados publican la ley de órden público, y desde aquel momento funcionan los tribunales militares? No. Pues quiere decir que esa día sucederá á la ley del Jurado lo que ahora ocurrirá con la ley orgánica de 1870 y la ley de enjuiciamiento criminal de 1882.

Pero hay más, si todavía quedara alguna sombra de escrúpulo al partido conservador, aún existe la disposición final en virtud de la cual el Gobierno está autorizado para suspender por un año la aplicación del Jurado, en una, en varias ó en todas las provincias. Y se dice: «pues esa es la condenación del Jurado.» De manera, señores, que las que son concesiones á la suspensión del partido conservador, las que son medidas de exquisita prudencia, todo eso quedaría producir las alabanzas del partido conservador, se en- grime como arma contra el Gobierno y la mayoría que acceden á esas pretensiones, para no hacer ensayos aventurados ó peligrosos, en una palabra, para no exponerse á que el ensayo pueda realmente producir males resultados. (EJ Sr. Hernández Iglesias: No es justo el Sr. Ministro.) Pues no lo entiendo. (EJ Sr. Hernández Iglesias: Yo se lo explicaré si el Sr. Presidente me lo permite.) No tengo en ello inconveniente.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernández Iglesias.

El Sr. HERNÁNDEZ IGLESIAS: Como sabe su señoría y el Senado, hay rebelión con que solo en una pequeña localidad del país se levante una partida para embarazar, por ejemplo, las elecciones municipales.

Pues bien, Sr. Ministro y Sres. Senadores, todos comprenderéis que esto no motivaba, con arreglo á la antigua legislación, ni preceptuaba de ningún modo, ni obligó jamás á que se encomendara á los tribunales militares la administración de justicia. Hubiera sido el escándalo de los escándalos obrar así. Y esta garantía que S. S. defiende y que es la única que hay, consiste en que por esta causa se suspenda la ley del Jurado, por lo menos en aquella localidad, ó se aplique el estado excepcional militar.

Resultará, pues, que hoy que los rigen instituciones liberales, viene á ser un recurso ordinario en esta materia, un recurso obligado, necesario és indispensable, lo que antes hubiese escandalizado á los hombres más reaccionarios de este país. No cabe término medio; estos acontecimientos que constituyen delito de rebelión, no se pueden remediar sino por esos procedimientos anormales que S. S. recomienda, y bá aquí cómo yo lo decía al Sr. Ministro: no es ya solo que haya necesidad de buscar en el procedimiento excepcional la conservación de los otros intereses que puedan ser atacados por los delitos de rebelión y sedición, sino que no hay otro medio.

Ciertamente, no se le ha, y el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que tiene tan raro entendimiento, y que en materia de derecho, como en tantas otras tanto sabe, no ha podido encontrar otro medio que el de la suspensión de la ley ó la declaración del estado excepcional. Es decir, que esto va á ser cosa de todos los días, porque nótese bien (y de esto no han hablado ni el Sr. Alcoco ni el Sr. Ministro), que una de las cosas más graves que resultarán de no aceptarse mi enmienda, será que no haya posibilidad material de constituir el tribunal de Jurado con arreglo á la ley, en los momentos en que se cometa un delito de la clase á que me vengo refiriendo.

El Sr. PRESIDENTE: Continúa el uso de la palabra el Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Alonso Martínez): Señores Senadores, bendita sea la discusión, porque aquílita el valor de los argumentos. Ya no se habla de dejar sin amparo al Rey ni á la Reina Regente; ya no se habla de defender á las Cortes; se habla solo de asegurar las elecciones municipales ó el ejercicio libre de las funciones de un Ayuntamiento. Sobre esto, y atendida la hora, me parece inoportunamente discutir, puesto que ya dejamos consignado que aquí no corre peligro ni los Poderes irresponsables ni ninguna de las instituciones que forman nuestro régimen.

El Sr. HERNÁNDEZ IGLESIAS: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. HERNÁNDEZ IGLESIAS: Ruego al señor Presidente me permita declarar con toda la sinceridad de mi corazón y con toda la energía de mis convicciones, que el gravísimo, el capital defecto (siquiera el curso de la discusión nos haya llevado á otro terreno) que tiene la no aceptación de mi enmienda, es que los Poderes inamovibles que la Constitución reconoce quedan absolutamente abandonados. (El Sr. Ministro de Gracia y Justicia: Eso no es exacto; hemos demostrado lo contrario.) Yo no le he dicho con tanta crudeza; el Sr. Ministro es quien me obliga á declararlo.

El Sr. SECRETARIO (Abascal): ¿Se toma en consideración la enmienda del Sr. Hernández Iglesias?

El Senado acordó negativamente.

Leido por el mismo Sr. Secretario el art. 4º del dictámen, y abierta discusión sobre el mismo, dijo
El Sr. SILVELA (D. Luis): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: Si el Sr. Silvela se propone dar alguna extensión a su discurso, habrá que suspender la sesión.
El Sr. SILVELA (D. Luis): Señor Presidente; aunque no pensaba dar una extensión extraordinaria a mi discurso, me parece que ha de ser, sin embargo, bastante, si se tiene en cuenta lo avanzado de la hora; pero estoy, como siempre, á las órdenes de la Presidencia.
El Sr. PRESIDENTE: Se suspende esta discusión.
Se leyeron los dictámenes de la Comisión pernamente de actas y calidades, proponiendo la admisión al desempeño del cargo de Senadores, respectivamente, de los Sres. D. José Fernando González por la provincia de Puerto-Rico (Véase el Apéndice 5.° a este Diario), y del Sr. D. Juan de Dios Sanjuan (Véase el Apéndice 6.° a este Diario), por tener ambos justificación a su aptitud legal.
El Sr. PRESIDENTE: Estos dictámenes se imprimirán, repartirán y se señalará día para su discussión, y un Sr. Secretario se servirá preguntar á la cámara si declara urgente su discussión.
Hecha la oportuna pregunta por el Sr. Secretario Abascal, el Senado así lo acordó.

Quedó sobre la mesa, para conocimiento de los Sres. Senadores, el estado que se expresa en la comunicación siguiente:
«MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Excmos. Sres.: De acuerdo con lo que en la sesión del 27 de Enero último ofrecí al Sr. Senador D. Manuel Salamanca, tengo el honor de acompañar adjunto á V. E.E. el estado comprensivo de la recaudación de la renta de Aduanas en Cuba, desde Setiembre á Diciembre últimos, con el detalle de tonelaje en los tres primeros meses, pues todavía no se han recibido en este Ministerio los datos correspondientes á Diciembre, cuya recaudación se conoce en conjunto por aviso telegógrafo de la autoridad superior de la isla.


Se leyeron por primera vez y pasaron á la Comisión, anunándose su impresión y reparto á los señores Senadores, las enmiendas del Sr. Oliva al dictámen relativo al proyecto de ley sobre concesión de terrenos en concepto de aprovechamiento común y dehesas boyales, a saber:
Al párrafo segundo y último del art. 1.° (Véase el Apéndice 2.° a este Diario);
Al art. 2.° (Véase el Apéndice 3.° a este Diario), y de nuevo en el mismo párrafo;
Al párrafo segundo y último del art. 4.° (Véase el Apéndice 4.° a este Diario).

Formulada la pregunta por el Sr. Secretario Abascal, de si se reunirían las Secciones el lunes para constituirse y nombrar varias Comisiones, el acuerdo de la Cámara fue afirmativo.

El Sr. PRESIDENTE: Orden del día para el lunes:
A primera hora reunión de Secciones para constituirse y nombrar Comisiones.
Continuación del debate sobre establecimiento del juicio por jurados para determinados delitos.
Discusión de los dictámenes acerca de los asuntos siguientes:
- Actas:
  - Venta del dominio directo de los terrenos pertenecientes á la Comunidad indígena del Cauyé.
  - Robo del precio de los telegramas destinados á la publicidad en la prensa política.
  - Inclusión en el plan general de carreteras de tres ramales:
    - Uno de Herrera á Puente-Gonill;
    - Otro de Badolato á Casariche, y
    - Otro de la estación de Padreá á la carretera la Estepa.
Se levantó la sesión.

Eran las seis y cuarenta minutos.